

66ª REUNION — 8ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES ANTENOR R. FERREIRA, ROBERTO J. NOBLE
Y RODOLFO COROMINAS SEGURA

MINISTRO PRESENTE: de Hacienda, doctor Federico Pinedo; DIPUTADOS PRESEN-
TES: Agüero Santos, Aguirrezabala Miguel A., Ahumada Luis Alberto, Alonso Alfredo J., Ama-
deo y Videla Daniel, Ameri Rogelio L., Amodeo Aurelio F., Andreis Fernando de, Araújo Ernesto
M., Arce José, Arnoldi Adolfo, Arrieta Hermínio, Basualdo Honorio, Benegas Tiburcio, Ber-
múdez Manuel A., Besasso Manuel V., Biancifiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bonazzola Carlos F.,
Bruiolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Buitrago Pedro, Bunge Augusto, Bustillo
José M., Buñán Marcelino, Cáceres Lorenzo, Cafferata Juan F., Candia Cornelio, Cárcano Miguel
Angel, Carreras Ernesto L. de las, Carreras José, Carús Agustín J., Castañeiras Alejandro, Castro
Felipe, Coca Joaquín, Contte José A., Cordero Octavio, Corominas Segura Rodolfo, Costa Méndez
Nicanor, Courel Carlos D., Della Latta Jerónimo, De Miguel Benito, Dickmann Adolfo, Dickmann
Enrique, Escalera Facundo, Escobar Adrián C., Espil Alberto, Fernández Damián, Ferreira An-
tenor R., Ganza Marcelino, García Goriastiga Raúl, Gichioldi Américo, Giménez Angel M., Godfrid
tenor R., Godoy Raúl, Gómez Rincón Abel, González Benjamín S., González Guerrico Manuel, Gon-
zález Maseda Manuel, González Valentín, Graiffina Santiago, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Gu-
dallmelli Aquiles M., Inda Rufino, Iribarne Alberto, Iriondo Urbano de, Jardel Enrique C., Korn
Guillermo, Lamesa Juan B., López Héctor S., Magris Amleto, Mancini Rafael, Marcó Cipriano F.,
Martínez José Heriberto, Mattos Luis María, Molina Serapio, Moret Carlos (h.), Mouchet Enrique
Moussa Eduardo, Movsichoff Bernardo, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Padilla
Tiburcio, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacio Benjamín, Palmeiro José, Parera Gregorio,
Parodi Misael J., Pena José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pfleger José E., Pintos Angel, Pita
Carlos A., Pressacco Juan P., Pueyrredon Carlos A., Quiroga Félix, Rodó Pedro, Ramiconi Luis,
Ramírez Manuel (h.), Repetto Agustín, Repetto Nicolás, Rodríguez Alfredo, Rozas José E., Ruggieri
Silvio L., Ruiz Oscar, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schoo Lastra Dionisio, Sellarés Avelino,
Simón Padrós Juan, Solari Felipe C., Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Sponeri Daniel C.,
Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Vicchi
Adolfo A., Vidal Baigorri José, Videla Dorna Daniel, Videla Rodolfo G., Vionnet Rodolfo L.,
Wade Eugenio, Zarazaga Marcial J., Zerda Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Acosta
Guillermo, Araújo José Ignacio, Becerra Eugenio A. (h.), Bosano Ansaldo Daniel, Calderón Os-
valdo M., Degano Alfredo P., Fresco Manuel A., Garayalde José María, Herrera Bruno J., Lencinas
Rafael Néstor, Lima Vicente Solano, Rojas Marcos E., Salas José Raquel, Saravia José M.; CON
AVISO: Pomponio Vicente E.; SIN AVISO: Araújo Eudoro D., Crito Miguel, Dávila Miguel V.,
Manacorda Carlos, Morrogh Bernard Juan F., Ocampo Enrique, Ruiz Guifazú Jacinto, Vallejo
Luis A., Vignart Uberto F.

- 1.—Manifestaciones de la Presidencia.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo contestando el pedido de informes relativos a la construcción de la línea férrea de La Paz a Feliciano (Entre Ríos).

II.—Peticiones particulares.

III.—Proyecto de ley del señor diputado Mancini sobre contribución para la erección de un monumento al general San Martín en San Jorge (Santa Fe).

- 4.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones al señor diputado Salas.
- 5.—Termina la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre unificación de impuestos internos. Se aplaza la consideración de la parte relativa a prórroga y distribución del impuesto a los réditos e impuesto a las ventas.
- 6.—Orden de la labor de la Honorable Cámara.
- 7.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre creación de la Junta Reguladora de Vinos.

—En Buenos Aires, a cinco de Diciembre de 1934, siendo la hora 15 y 30:

bos impuestos se establece el mismo régimen de reparto.

Sr. Arce. — Yo no veo por qué se ha de hablar de impuesto a las ventas. Si este impuesto se aprueba, bastará poner en la ley respectiva un artículo que diga que se recaudará y distribuirá en la misma forma que el impuesto a los réditos. Entretanto el Congreso tiene que pronunciarse sobre si se prorroga, o no, este último impuesto y a continuación cómo se lo ha de distribuir.

Sr. Palacio. — Apoyo la indicación del señor diputado por la Capital, de que entremos a considerar de inmediato la ley reguladora de vinos hasta terminarla, para poder empezar la sesión de mañana considerando el proyecto sobre impuesto a las ventas.

Sr. Vicchi. — Pido la palabra.

Votaremos la proposición del señor diputado Dickmann, porque simplifica el procedimiento. No hay que olvidar que la ley referente a la Junta Reguladora de Vinos es complementaria de la ley de unificación de impuestos internos y corresponde, por tanto, tratarla ahora.

Sr. Ghioldi. — Pido la palabra.

La diputación socialista no podrá esta noche cumplir con las obligaciones parlamentarias, si es que la Cámara resuelve la sesión nocturna, porque, como es notorio, tiene obligaciones partidarias.

Sr. Corominas Segura. — Podríamos continuar hasta las 21 y 30.

Sr. Palacio. — Y entrar a considerar después la ley sobre ventas.

Sr. Dickmann (A.). — Esa no es mi moción.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar la proposición formulada por el señor diputado por la Capital, de que se aplacen los demás artículos del despacho de la comisión, y se pase a considerar el asunto número 2 de la misma orden del día 137: ley reguladora de vinos.

—Resulta afirmativa.

Sr. Corominas Segura. — Es para agotar el debate en general en la sesión de hoy.

7

JUNTA REGULADORA DE VINOS

Orden del día número 137

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo creando la Junta Reguladora de Vinos y una sobretasa de \$ 0,0125 moneda nacional por litro de vino, por el término de cinco años; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase con carácter de emergencia la Junta Reguladora de Vinos, que será designada por el Poder Ejecutivo y funcionará con la colaboración de una comisión asesora honoraria. Las relaciones de la junta con el Poder Ejecutivo se efectuarán por conducto del Departamento de Agricultura.

La Junta Reguladora de Vinos estará constituida por un presidente y dos vocales nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Honorable Senado. La comisión asesora honoraria, se compondrá de representantes del Banco de la Nación, Banco Hipotecario Nacional, de las provincias productoras, y demás intereses afectados, que serán nombrados por el Poder Ejecutivo nacional, en el número que estime conveniente. Esta comisión asesora deberá ser consultada y dictaminará en toda cuestión de carácter fundamental.

Art. 2º — La junta deberá adoptar las medidas convenientes, para que la producción vitivinícola nacional no siga excediendo los requerimientos normales de la población y su incremento. Con tal objeto queda especialmente facultada:

a) Para otorgar indemnizaciones equitativas, que promuevan la supresión en la

medida indispensable de la vid vinífera o su substitución por uva de mesa o de pasas o por otros cultivos;

- b) Para disponer la compra de materia prima con destino distinto a la elaboración de vino;
- c) Para adquirir los excedentes de vino de los bodegueros que se obliguen a recomprarlo cuando la junta decidiese venderlo en la forma que considere más conveniente, a los fines de regular la oferta ajustándola a la capacidad de absorción del consumo. Esta facultad podrá también ser ejercida por la junta, mediante préstamos con garantía de prenda agraria con los recaudos que juzgue necesarios;
- d) Para concertar convenios con los gobiernos de las provincias productoras de vinos, sujetos a la ratificación definitiva del Poder Ejecutivo nacional tendientes a la acción coordinada para la consecución de las finalidades antes mencionadas, y las que propone el artículo 5º de la presente ley;
- e) Para fijar con carácter obligatorio la época de vendimia en cada una de las regiones vitivinícolas del país, pudiendo aplicar multas hasta de pesos 10.000 a los infractores, según la gravedad de la falta.

Art. 3º — Facúltase al Poder Ejecutivo a invertir en las operaciones previstas en el artículo anterior, hasta la cantidad de pesos 30.000.000 moneda nacional, a cuyo efecto podrá hacer las operaciones de crédito que crea necesarias en la medida en que no se empleasen con este propósito fondos provenientes de empréstitos de desbloqueo.

Dicha suma se entregará a la junta en calidad de adelanto y deberá ser amortizada con el producto de la sobretasa que fija el artículo siguiente.

Art. 4º — Créase, por el término de seis años una sobretasa adicional de 1 centavo por litro de vino expedido, cuyo producido, previa la separación de los recursos requeridos por el artículo 8º, se destinará a amortizar las obligaciones contraídas, conforme lo dispuesto en el artículo precedente.

Art. 5º — Durante la vigencia de la sobretasa, la facultad que asista a las provincias productoras de vino de regular la producción

a que se refiere el artículo 26, párrafo 3º de la ley de unificación de impuestos internos, sólo podrá ser ejercida a los efectos de esta ley por el Poder Ejecutivo nacional, el que podrá tomar las medidas necesarias para hacer obligatorias las disposiciones que se dicten en tal sentido.

Art. 6º — Cualquiera nueva plantación de vid vinífera en todo el territorio de la Nación, durante el período de tres años, prorrogable hasta cinco años por el Poder Ejecutivo, pagará un impuesto de \$ 1.000 m/n. por hectáreas, cuyo producido se destinará a los mismos fines que la sobretasa creada por la presente ley.

Art. 7º — A partir de la vigencia de esta ley, sólo podrá elaborarse vino genuino dentro de la provincia o territorio nacional en que se produjese la materia prima empleada.

Art. 8º — La junta someterá su presupuesto anual de gastos de administración a la aprobación del Poder Ejecutivo, quien lo remitirá al Honorable Congreso para su confirmación, modificación o rechazo, aplicándolo mientras éste no lo haya modificado o rechazado.

Art. 9º — Comuníquese, ect.

Sala de la comisión, Noviembre 27 de 1934.

José Heriberto Martínez. — Alfredo J. Alonso. — Herminio Arrieta. — Eduardo Bruchou. — José M. Bustillo. — Raúl Godoy. — Pedro Gropo. — Julio A. Noble. — Juan Simón Padrós. — Abraham de la Vega.

En disidencia parcial con respecto al artículo 1º:

Julio A. Noble.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1934.

Al Honorable Congreso de la Nación.

La situación de la industria vitivinícola es muy grave. El consumo actual de vino se calcula de 5.500.000 hectolitros por año; y los grandes sobrantes que hoy presionan intensamente sobre el mercado, prometen acrecentarse hasta 12.500.000 hectolitros al 1º de Mayo próximo, después de la vendimia que se avecina y a pesar de las recientes heladas. En tal forma, las existencias de vino podrían satisfacer los requerimientos de más de dos años de consumo en todo el país.

Con esta congestión de la oferta, los precios han descendido con violencia. La baja suele constituir el mejor correctivo del exceso de producción; sin duda que dejarla desarrollarse espontáneamente podría ser un remedio en la situación presente, si no interviniesen otras circunstancias que transformarían el reajuste natural de la producción en una catástrofe de vastas proyecciones.

Es cierto que el descenso de los precios determina la restricción automática de la elaboración de vino y la destrucción en la cepa, por falta de empleo, del excedente de materia prima. Por desgracia, el problema no es tan simple en la realidad, pues esta destrucción de valores afectaría sobre todo a los cultivadores sin bodegas, por ser también natural que quienes las tienen prefieran elaborar la uva propia sin comprar la ajena. Tanto es así, que en 1933 el gobierno de Mendoza consideró necesario indemnizar a los vinicultores de 25.000 hectáreas (cerca del 30 % del total), cuyo fruto no había sido adquirido por los industriales.

Esta nueva crisis vinícola encuentra exhaustos a productores y bodegueros. Varios años de adversidad e intervenciones contraproducentes en el juego espontáneo de la industria, han agotado sus reservas impidiéndoles mantenerse en pie si la baja de precios se prolonga. Actualmente, el vino se vende en Mendoza a mucho menos que su costo. La producción se descapitaliza, los créditos bancarios se congelan irremisiblemente y la quiebra de la industria es inminente.

Frente a estos acontecimientos se abren dos caminos al gobierno: dejar que los hechos sigan accidentalmente su propio curso, o someter la industria a un tratamiento circunstancial que la reconstituya y asiente sobre bases sanas, sin las profundas perturbaciones económicas, sociales y bancarias que traería consigo el primer procedimiento.

Cuando más de medio millón de habitantes dependen estrechamente de una industria, el problema de la superproducción mal puede afrontarse con el mismo criterio con que se decide la suerte de algunas empresas que por trabajar sin eficiencia o producir en demasía, son eliminadas sin mayores conmociones para la colectividad. Después de todo, el procedimiento drástico de liquidación, además de significar el desastre general para las regiones productoras, traería dentro de sí los gérmenes de la repetición del mal. Una industria tan

sensible no podría resistir sacudimientos semejantes sin verse forzada a cortar la producción más allá de lo necesario para restablecer el equilibrio; como lógica consecuencia, subirían exageradamente los precios en perjuicio del recuperamiento que está experimentando el consumo, y se alentaría de nuevo la producción, según lo demuestra concluyentemente la experiencia.

El consumo per cápita, muy disminuido desde 1930 por la depresión económica y principalmente por el alza desorbitada de los precios resultante de medidas artificiosas, tiende nuevamente a crecer. De 33 litros en 1932, subió a 38 litros en 1933 y alcanzará a 44 litros en 1934. El consumo normal del país antes de esta crisis, se estimaba en algo más de 55 litros por habitante; de tal suerte que la industria tiene por delante un amplio margen para aumentar sus ventas.

Todo esto ha decidido al Poder Ejecutivo a plantear urgentemente el problema ante vuestra honorabilidad y a proponer ciertas medidas de emergencia, con la convicción de que preponderarán al saneamiento y equilibrio de la producción. Pero si vuestra honorabilidad considera que es posible resolver esta situación en otra forma, evitando los mismos trastornos que se ha querido alejar, los representantes del Poder Ejecutivo sabrán estudiarla con espíritu de cooperación a fin de llegar a las soluciones que más convengan a los intereses nacionales.

A razón de los 44 litros ya citados por habitante, la población argentina consume 5.500.000 hectolitros de vino por año, excluida la cantidad insignificante que se importa. Pero la capacidad de producción de la industria, de acuerdo con los rendimientos medios de la producción es de 7.900.000 hectolitros. La producción normal excede, pues, de 2.400.000 hectolitros al consumo. En el supuesto que éste siga incrementándose hasta 55 litros por habitante, que es el coeficiente razonable a que se ha hecho referencia, y teniendo en cuenta el aumento de la población, el consumo absorbería unos 1.500.000 hectolitros más, y el exceso normal de producción se reduciría a 900.000 hectolitros, o sea aproximadamente la producción de 15.000 hectáreas de vid.

Habría, pues, 15.000 hectáreas de más en la industria. Persistir produciendo en ellas uva vinífera, llevaría año tras año, hasta que el crecimiento de la población absorbiera todo el exceso, a una destrucción sistemática de valo-

res, como que estas crisis de superproducción de vinos han sido atacadas frecuentemente en el país con el procedimiento simple de abandonar la materia prima sobrante.

Juzga el Poder Ejecutivo que ha llegado el momento de aplicar una solución orgánica que evite en lo futuro la necesidad de recurrir a tales arbitrios. Con tal propósito, se impone la transformación de los cultivos de vid. Según los expertos, en cerca de la mitad de aquella superficie podría substituirse la uva vinífera, mediante el injerto, por uvas de mesa, o uvas de pasa que ahora se importan; en la otra mitad sería posible substituirse la vid por diversos frutales de fácil implantación en esas regiones.

Los cultivadores, sin embargo, carecen de los recursos suficientes para aplicar este programa de substitución de cultivos, que, además, tardaría algunos años en dar sus rendimientos. Requieren la cooperación del Estado y de los bancos oficiales que tienen comprometidos fondos cuantiosos en la industria vitivinícola. Con este propósito, el proyecto autoriza a la junta a otorgar una indemnización equitativa a los productores dispuestos a cambiar sus cultivos, eligiendo principalmente las zonas marginales y menos adecuadas para la uva vinífera.

La substitución de cultivos en la medida indicada se propone llegar al equilibrio de la producción y el consumo futuros, mas no resuelve el problema grave y perentorio de los sobrantes de vino que, como se ha expresado, bastan para satisfacer el consumo de más de dos años. Es indispensable que esos sobrantes desaparezcan cuanto antes y que sólo queden las existencias normales destinadas a compensar las oscilaciones naturales de la vendimia. No cabe, entonces, otra solución que la de moderar transitoriamente la elaboración de vino para dar salida al que se encuentra acumulado. Con ello habrá que dar un destino distinto a la materia prima sobrante, principalmente a la producida por los cultivadores sin bodega que poseen una fuerte proporción de los viñedos y no tienen los medios para utilizarla en otras aplicaciones. El proyecto que se presenta a vuestra honorabilidad dispone en tales casos el pago de una indemnización a los productores, suficiente para que puedan afrontar los gastos culturales y su propia manutención. Es nece-

sario precaverse de los errores cometidos anteriormente a este respecto. La indemnización debe ser muy prudente; de lo contrario, actuaría como estímulo para ampliar la producción, como sucedió hace pocos años, cuando las entidades constituidas para conjurar la crisis pagaron \$ 4,50 m/n. por la uva de esos viñateros, se empleara o no en la elaboración de vino.

Esta operación debe iniciarse en seguida, con la vendimia que va a comenzar, por cuanto la elaboración de toda la uva producida, aun después del daño de las heladas recientes, no encontraría capacidad en las bodegas casi repletas por los sobrantes mencionados.

Pero no basta que disminuya la fabricación para que dichos sobrantes tengan salida. Es necesario también que la salida se realice ordenadamente, sin la precipitación a que se verían impulsados los industriales por sus apremiantes compromisos financieros, en perjuicio de las cotizaciones del producto. Para regular en esta forma el mercado, el proyecto propone el siguiente procedimiento: Una junta reguladora de vinos, designada por el Poder Ejecutivo, compraría el vino existente sustrayéndolo del mercado, a fin de venderlo gradualmente a los bodegueros. Ello no requeriría el desplazamiento físico del producto. El vino quedaría en las mismas bodegas en donde se encontrase, bajo la responsabilidad del bodeguero, quien correría con todos los riesgos de la operación y quedaría obligado a recomprarlo cuando la junta decidiese venderlo. Se trata más bien de un préstamo que de una operación de compra; y si se ha adoptado esta forma se debe principalmente a la conveniencia de que la junta tenga la libre disposición del producto en todo momento.

Lo mismo que en el caso de la uva, es indispensable para el éxito del programa evitar a toda costa el error de elevar los precios como se hizo hace pocos años, mediante la contraacción pronunciada de la oferta. Se encareció el vino y disminuyó sensiblemente el consumo, como se ha visto más arriba, agravándose el problema que se quería solucionar. Los precios altos conspiran fatalmente contra la estabilidad de la industria.

Los fondos requeridos para los gastos de substitución de cultivos se calculan en pesos 15.000.000 moneda nacional, y los necesarios

para indemnizar a los cultivadores de uva se estiman en otro tanto, de modo que la financiación del proyecto exige la cantidad global de 30.000.000 de pesos moneda nacional. El empleo de estos fondos no será inmediato sino gradual; de tal modo, que de los mismos podrán tomarse los recursos necesarios para adquirir el sobrante de vino y regular la oferta, en la forma indicada, reintegrándolos a medida que la junta venda el vino.

Sin duda alguna que la junta reguladora proyectada, por el hecho de constituir un resorte directo del gobierno nacional, se encontrará en mejores condiciones que las asociaciones o entidades privadas que pudieran constituirse, ya sea para regular la oferta o para ejecutar las otras operaciones privadas que pudieran constituirse, o para ejecutar las otras operaciones contempladas en este proyecto, a saber, la substitución por otros cultivos de vid para vinificar y la indemnización del fruto que no se destina a la elaboración del vino. Por supuesto que en todas estas tareas deberá contarse con la valiosa cooperación de los gobiernos locales.

Del punto de vista de la financiación, el proyecto no ofrece mayores dificultades. El Poder Ejecutivo solicita de vuestra honorabilidad la autorización correspondiente para procurarse los fondos necesarios, que como se ha indicado asciende a 30.000.000 de pesos moneda nacional, mediante algunas operaciones de desbloqueo de fondos tendientes a regularizar remanentes de cambio atrasado, u otras operaciones de crédito en caso de no llegar el producido de aquellas operaciones a la cantidad indicada.

Pero este desembolso no significará una nueva carga para el tesoro nacional, porque se crea simultáneamente el recurso para amortizar rápidamente los fondos provenientes de esas operaciones de crédito. En efecto, el proyecto dispone la imposición con este destino, de una sobretasa adicional de un centavo y cuarto por litro de vino, que elevará transitoriamente a seis centavos la tasa unificada. Dado el consumo actual de 5.500.000 hectolitros, la sobretasa producirá 6.875.000 pesos moneda nacional en el primer año, y aumentará luego su rendimiento con el incremento del consumo del vino. Cualquiera sea la forma en que éste reaccione, en un plazo de cinco años se habrá amortizado cómoda-

mente los 30.000.000 de pesos moneda nacional requeridos por la financiación del plan.

El establecimiento temporario de la sobretasa, apenas disminuye las considerables ventajas que la industria del vino va a derivar de la unificación de los impuestos internos. Como es sabido, los altos tributos que gravan este producto en el interior del país serán substituídos por la tasa unificada, la cual, aun después de agregarse la sobretasa, resulta muy inferior a aquéllos. En cuanto al vino que consume la Capital Federal, la situación no varía, pues la tasa única más la sobretasa igualan al gravamen anterior.

Toda la financiación del programa está calculada sobre el rendimiento medio de uva observado en un largo período de años, durante el cual ha oscilado bastante. Si en el curso de la aplicación del programa se presentasen rendimientos más altos, será necesario extremar los esfuerzos para evitar otra congestión de la oferta de vino. A fin de que en tal caso no se requiera acudir a nuevos recursos financieros, es indispensable que la junta pueda retirar sin gasto alguno una parte de la producción de uva vinífera para que no se dedique a la elaboración de vino. Con este propósito se establece en el proyecto de ley que durante el plazo de la sobretasa, la facultad que asista a las provincias de regular la producción, de acuerdo con el artículo 26, párrafo 3º del proyecto de ley de unificación de impuestos internos, sólo podrá ser ejercida por el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la junta. Con este propósito el Poder Ejecutivo podrá tomar las medidas necesarias para hacer obligatorias las disposiciones dictadas.

Frente a los acontecimientos tan serios de esta crisis vitivinícola, no es el caso de discutir acerca de los límites normales de la acción del Estado. Afirma el Poder Ejecutivo que si hubiera encontrado otra forma más simple para atacar el problema, no hubiera vacilado en proponerla en lugar de este proyecto. Pero no ha encontrado otro camino que el de la intervención del Estado por medio de una junta formada con personas de autoridad y experiencia. Después de todo, esta intervención temporaria viene a ser la consecuencia forzosa de la aplicación de medidas artificiales cuyas consecuencias nocivas han perturbado hondamente la vida de la industria. Este proyecto se aparta de

ellas y busca una solución de fondo, sin descuidar la difícil situación planteada por los actuales sobrantes de vino, que deben ser eliminados tan pronto como sea posible, despejando el terreno para las soluciones orgánicas.

Las medidas preconizadas por el Poder Ejecutivo difieren también de las que hasta ahora se aplicaron, en cuanto su carácter y alcance son eminentemente nacionales y unen solidariamente a todas las zonas productoras del país, gracias a la unificación de los impuestos. Ninguna zona podrá beneficiarse indebidamente en perjuicio de las otras, como sucedió cuando los arbitrios puestos en juego por las dos principales provincias productoras, promovieron la rápida extensión de los cultivos en regiones en que la producción se desarrolla en condiciones mucho menos adecuadas. El proyecto que se envía a vuestra honorabilidad evita estas consecuencias y va más lejos aún. Para desalentar por completo la multiplicación de los viñedos mientras se aplica el programa, así en las regiones citadas como en las buenas zonas productoras, establece un impuesto elevado por hectárea de toda nueva plantación de vid destinada a la elaboración de vino. Con ello, el plan de ajuste de la producción al consumo no ha de ser estorbado en su desenvolvimiento por los inconvenientes que sobrevendrían si el fracaso de la producción de un año trajese como reacción inmediata el propósito de aumentar la superficie plantada como ha ocurrido en otras oportunidades.

Expuesto así este plan de reajuste de la producción vitivinícola, el Poder Ejecutivo considera conveniente expresar a vuestra honorabilidad la urgencia de considerarlo, a fin de que las medidas de emergencia que constituyen una de sus partes, lleguen oportunamente antes de iniciada la próxima vendimia.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.

Luis Duha. — Federico Pineda.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase con carácter transitorio la Junta Reguladora de Vinos, que será designada por el Poder Ejecutivo y fun-

cionará con la colaboración de los gobiernos de las provincias productoras. Las relaciones de la junta con el Poder Ejecutivo se efectuarán por conducto del Departamento de Agricultura.

Art. 2º — La junta otorgará indemnizaciones equitativas a fin de promover la sustitución de la vid vinífera por uva de mesa, o de pasas, o por otros cultivos, en la medida que fuese conveniente para que la producción de vino, en un término razonable de tiempo, no siga excediendo los requerimientos normales de la población y su incremento; podrá con ese objeto, disponer la compra de materia prima o su empleo en aplicaciones distintas de la elaboración de vino; y adquirir los sobrantes de vino de los bodegueros que se obliguen a comprarlo cuando la junta decidiese venderlo en la forma que considere más conveniente a los fines de regular la oferta ajustándola a la capacidad de absorción del consumo.

Art. 3º — Facúltase al Poder Ejecutivo a invertir en las operaciones previstas en el artículo anterior, hasta la cantidad de 30.000.000 de pesos moneda nacional, a cuyo efecto podrá hacer las operaciones de crédito que crea necesarias en la medida en que no se empleasen con este propósito fondos provenientes de empréstitos de desbloqueo.

Art. 4º — Créase, por el término de cinco años, una sobretasa adicional de 1,25 centavos por litro de vino, cuyo producido, previa la separación de los recursos requeridos por el artículo 7º, se destinará a amortizar las obligaciones contraídas, conforme lo dispuesto por el artículo precedente.

Art. 5º — Durante la vigencia de la sobretasa la facultad que asista a las provincias de regular la producción, de acuerdo con el artículo 26, párrafo 3º, de la ley de unificación de Impuestos Internos, sólo podrá ser ejercida por el Poder Ejecutivo nacional por intermedio de la junta, el que podrá tomar las medidas necesarias para hacer obligatorias las disposiciones que se dicten en tal sentido.

Art. 6º — Por toda nueva plantación de vid vinífera en todo el territorio de la Nación durante el término de cinco años, se pagará un impuesto de 1.000 pesos moneda nacional por hectárea, cuyo producido se destinará a los mismos fines que la sobretasa creada por la presente ley.

Art. 7º — La junta someterá su presupuesto anual de gastos de administración a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis Duhaú. — Federico Pinedo.

Sr. Presidente (Ferreira). — En consideración en general.

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

Debo informar en nombre de la mayoría de la comisión sobre el despacho que ha producido con respecto al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, proponiendo la creación de la Junta Reguladora de Vinos.

En el mensaje del Poder Ejecutivo se ha expuesto con amplitud y precisión el problema que trata de solucionar el proyecto de ley, problema de orden nacional. Allí se analiza a grandes rasgos la situación porque atraviesa la industria vitivinícola del país. Se hace referencias a las causas fundamentales que han determinado esta situación crítica y también se hace referencia a los remedios posibles, a las medidas que a juicio del Poder Ejecutivo deben adoptarse para tratar de impedir una situación de caos, una ruina total de esa industria, con grave perjuicio y daño para la economía general del país.

A fin de hacer más objetiva mi exposición y de encerrarla dentro de los límites más estrechos posibles, con el objeto de que pueda agotarse en la sesión de hoy el debate en general, voy a referirme, de preferencia, a las conclusiones contenidas en cuatro informes que han servido de base para la redacción de este proyecto de ley. Son ellos, un primer dictamen elevado en 1926 por un alto funcionario de Impuestos Internos al ministro de Hacienda de aquella época, en el que se hacía el estudio de la industria vitivinícola del país; después está el informe de la Comisión Nacional de la Industria Vitivinícola publicado en 1932, donde también se hace un estudio amplio y analítico de la situación de la industria; últimamente se ha producido otro documento de singular valor,

que es el estudio llevado a cabo por una comisión especial designada por la Sociedad Vitivinícola de Mendoza, comisión presidida por el ingeniero Franck Romero Day e integrada por tres vocales, estudio que ha tocado aspectos que hasta entonces no habían sido analizados a fondo, y que contiene revelaciones de suma importancia para la mejor comprensión del problema; y está, por fin, el informe que creo tienen a mano todos los señores diputados, porque ya ha sido impreso, expedido por un funcionario de la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco de la Nación, el señor Liaudat, y que aprovecho la oportunidad de elogiar francamente por las cualidades que ofrece, pues no solamente es una investigación muy concienzuda, sino que acusa una madurez de juicio realmente extraordinaria en un funcionario tan joven, y tiene hasta la virtud de la elegancia de estilo en su redacción.

Este último documento es, sin duda, el que ha servido más directamente al Poder Ejecutivo para la elaboración de su proyecto. Al mismo tiempo ha sido asesorado el Poder Ejecutivo nacional por dos personas de singular competencia para dicha labor. Me refiero al doctor Enrique Uriburu y al doctor Raúl Prebisch. El primero, con su reconocida autoridad de financista y con su no menos grande capacidad y conocimientos técnicos ha podido ser un asesor seguro para indicar los rumbos que han de seguirse en esta materia. Y en cuanto al doctor Prebisch, ha sido el asesor directo — según entiendo — que ha tenido el Ministerio de Agricultura para la elaboración del proyecto de ley, y además nos ha prestado en el seno de la subcomisión especial de la Comisión de Presupuesto, su valioso concurso, asistiendo a todas las sesiones y suministrando todos los informes que le fueron recabados y colaborando también en la redacción del despacho que hoy estamos considerando.

En «El Análisis del Problema Vitivinícola», publicado por el Ministerio de

Agricultura de la Nación, a que ya me he referido, se dan las cifras necesarias para demostrar con la elocuencia de los números, la importancia y la gravedad de este problema. Comienza por revelar lo que es la industria vitivinícola nacional, lo que significa dentro de la economía del país. Y así destaco estas cifras que voy a repetir, porque son la mejor expresión sintética de lo que representa la industria dentro de la economía argentina.

Tiene — dice el informe — alrededor de 500.000.000 de pesos invertidos en la industria vitivinícola: 350.000.000 en capital y trabajo, destinados a tierras para la formación de viñedos y 150.000.000 en construcciones. Alimenta un tráfico ferroviario de 600.000 toneladas, por lo menos, y abona a las empresas transportadoras cerca de pesos 30.000.000 en concepto de fletes, sin contar el transporte directo que se realiza por otros medios. La producción tiene un valor de cambio que ha excedido, en muchas oportunidades, de 200.000.000 de pesos y ha contribuido al mantenimiento de las finanzas del país, nacionales y provinciales, con más de 40.000.000 de pesos. Por último, la economía de 700.000 habitantes o más que pueblan varias provincias argentinas y algunos territorios nacionales, se encuentra librada casi por entero a las alternativas de esta industria. Es este un cuadro que por sí solo demuestra la importancia del problema que estamos analizando.

En el documento de que me ocupo se analizan las causas de la situación crítica porque atraviesa la industria vitivinícola y se llega, después de la recopilación de serias estadísticas de singular valor, a hacer algunas afirmaciones que pueden aceptarse como las premisas indispensables para llegar a la conclusión que ha informado el proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo. Esas causas residen en dos principales: una, la superproducción, otra, el subconsumo. Algunos opinan que, en realidad, ambas causas pueden resumirse en una sola: o que es superproducción o que

es subconsumo. Sin embargo, el análisis practicado por aquellos estudios, nos significaría que son dos causas diferentes, originadas a su vez por motivos distintos, aunque en alguna porción aparezcan como concurrentes.

Es evidente que si no hubiera subconsumo, si se mantuviera lo que podríamos llamar consumo normal en el país, o se alcanzarán cifras parecidas a las que obtiene el consumo en los países vitivinícolas del mundo, como ser Francia, Italia o España, es evidente que en la industria nacional no atravesaríamos una crisis como la que hoy soportamos. Pero, al mismo tiempo, es indiscutible que se ha operado un fenómeno que tiende a producir la superproducción en el país, y ello se comprueba por esta sola circunstancia: el crecimiento del cultivo de la vid vinífera en el país ha seguido un ritmo mucho más acentuado que el ritmo del crecimiento de la población del país. De manera que si cuando comenzó la verdadera expansión de la industria vitivinícola, al comienzo de este siglo, se hubiera conservado un ritmo igual de crecimiento entre la población y la producción, evidentemente no se hubiera creado la superproducción de uva y del producto elaborado.

Por eso acepto la conclusión a que arriba el señor Liaudat, de que una de las causas de la gran superproducción que soporta la industria vitivinícola proviene de este aumento a un ritmo extraordinario en la zona cultivada con vid vinífera.

La razón que ha movido a la gente de trabajo y de empresa a producir este fenómeno económico en el país, no ha sido otra que el rendimiento notable que produjo el cultivo de la vid para quienes lo efectuaron durante 20 o 30 años.

Me voy a detener de paso, a recoger una de las calificaciones con que ha sido obsequiada esta industria en esta Cámara, cuando se la ha llamado industria oligárquica. El crecimiento de la industria, el desarrollo que ha tenido desde 1900 a aquí, comprueba todo lo contrario.

Hasta el año 1886 había en Mendoza menor área plantada de viña que en San Juan. Fué la llegada del ferrocarril a Mendoza lo que determinó el primer período de expansión, y el segundo período de gran expansión se ha producido con posterioridad al año 1900, con la siguiente característica: se ha operado una gran subdivisión de la tierra; se ha producido el enriquecimiento del labrador. El que hoy era contratista, se transformó en el propietario de mañana y en el potentado del día siguiente. Y así, podemos afirmar que a través de menos de 35 años, los grandes potentados de la industria vitivinícola no son los oligarcas de antaño, no son los terratenientes que obtuvieron por herencia sus extensiones de tierra, sino los inmigrantes de ayer, que en el curso de una sola vida han llegado a convertirse en millonarios. Y el ejemplo lo podemos reducir a las cinco grandes figuras de la industria vitivinícola: Tomba, Giol, Tirasso, Escorihuela, Arizu.

Sr. Coca. — Y Graffigna.

Sr. Godoy. — Me refiero a los de Mendoza porque los conozco más de cerca y puedo tener la certeza de que no he de ser rectificado en mi afirmación.

Todos ellos fueron humildes trabajadores de la tierra y alcanzaron a ser los más grandes potentados de la industria; pero hoy están arruinados o por lo menos en camino de una ruina casi total por haber seguido el mismo ritmo de trabajo y empresa con que comenzaron en sus días humildes. Si esos hombres, una vez que adquirieron poderío, se hubieran sentado humildemente a vivir de sus rentas no estarían hoy en la situación crítica actual, pero como no podían apartarse del espíritu de empresa con que han llegado a nuestra tierra, ese espíritu de empresa los ha llevado a compartir hoy día las aflicciones, las amarguras y los riesgos emergentes de la crisis actual.

La otra conclusión interesante a que arriba el documento suscripto por el señor Liaudat, es de que habría subconsumo o de que, por lo menos, el con-

sumo en el país no podría alcanzar una cifra mayor que la que él califica como «consumo normal». Analiza las cifras del consumo per cápita, durante un espacio de años, para llegar a la conclusión de que el consumo normal per cápita y por año no puede exceder de la suma de 58 litros. Es bueno recordar que en Francia, en Italia y en España se sobrepasa la cifra de 100 litros o anda muy cerca de ella. En este punto discrepo con la conclusión apuntada. Creo, como lo observa ya el informe de la Sociedad Vitivinícola a que me referí anteriormente, que el problema del consumo es un poco más complejo, que no existe un consumo nacional únicamente sino que el coeficiente del consumo nacional está formado por factores parciales y que aquél es la resultante de los consumos parciales.

Ha revelado el informe de la Sociedad Vitivinícola que el consumo por habitante varía en el país de una región a otra, de una provincia a otra. Y ofrece sorpresas realmente extraordinarias. Tengo a la mano un cuadro estadístico a cuyas cifras voy a referirme un poco en detalle. En él se consigna, por ejemplo, que el término medio del consumo en el país coincidente, por otra parte, con el que establece el señor Liaudat, podría ser el de 58 litros por habitante, aunque en otros años ha llegado a 66 ó 67 como máximo. Pero en el mismo año en que ese consumo término medio llega en el país a 58 litros, en algunas provincias o territorios y en la Capital Federal excede en mucho de esa cifra. Así, para la Capital tenemos una cifra de 98 litros por habitante; para la gobernación del Chaco, 80; para La Pampa, aproximadamente 80. En cambio, en algunas provincias ese coeficiente descendiende a 28, 24, 30 y 35 litros por habitante.

Llegamos así a la conclusión de que no hay un coeficiente nacional uniforme. Las condiciones étnicas, de clima, de ocupación, son muy parecidas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, por ejemplo, y el consumo de vino en una y otra provincia debiera ser más o menos equivalente. Sin embargo, el

coeficiente de consumo en una y otra provincia varía en forma apreciable.

Tanto en la Capital Federal como en los territorios nacionales, el coeficiente de consumo es más elevado que en las provincias, en que los impuestos provinciales o municipales son muy altos. De ahí que podamos afirmar que una de las causas que han influido con mayor fuerza en el coeficiente de consumo, radica en los altos impuestos provinciales y en las trabas y gabelas a la introducción y expendio del vino.

Sr. Dickmann (E.). — ¿No cree el señor diputado que hay también de por medio una cuestión de salarios?

Sr. Godoy. — Es posible. Sin embargo, es desconcertante constatar que en el territorio de La Pampa el coeficiente de consumo varía enormemente con relación al coeficiente de consumo en la provincia de Buenos Aires, en la parte limítrofe con La Pampa, zonas en las que los salarios no presentan mayor disparidad.

En la provincia de Buenos Aires el coeficiente desciende porque existe el impuesto provincial y hay una serie de gabelas que impiden el libre comercio. En cambio, en La Pampa no existe más que el impuesto nacional, además del impuesto de la provincia productora, y no hay gabelas ni trabas para el comercio, lo que hace que el índice de consumo sea superior.

Sr. Dickmann (E.). — Porque La Pampa está habitada por chacareros italianos que tienen el hábito de tomar vino y porque allí los salarios, en general, son más altos que en la provincia de Buenos Aires.

Sr. Godoy. — Es posible que ese factor influya. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe, donde se pagan salarios más altos que en La Pampa, el coeficiente de consumo es menor. La explicación estaría en que en Santa Fe existen altos impuestos provinciales al vino.

Es probable que una vez que haya surtido sus efectos la unificación de los impuestos internos se establezca un índice de consumo más uniforme en todas las regiones del país, y es muy pro-

bable que ese índice tienda a subir hasta igualarse o aproximarse al que existe en la Capital Federal. Si así ocurriera, por ese solo hecho se habría subsanado en un lapso relativamente breve la mayor parte de las dificultades de la industria, porque si llegáramos a un coeficiente de consumo de 65 a 70 litros per cápita, la producción nacional sería insuficiente para abastecer el consumo, o, por lo menos, estarían muy equilibradas la oferta y la demanda; habría desaparecido la situación de angustia, de ruina, de descapitalización de los productores.

Abrigo la esperanza, quizá con exceso de optimismo, de que la unificación de impuestos internos traiga por sí misma el remedio normal al que todos aspiramos: la nivelación paulatina de la oferta con la demanda, pero siempre que por lo menos se mantuviera estacionaria el área de cultivo de la vid, porque si se entra de nuevo en el frenesí de aumentar desordenadamente los cultivos de viña, sobre todo en regiones donde ese cultivo no puede ser sino antieconómico, tendríamos de nuevo a plazo breve una situación de crisis que contemplar y resolver.

De suerte que aunque acepto el remedio fundamental propuesto en el proyecto del Poder Ejecutivo, referente a la extirpación de viña, creo que no será necesario hacer uso de esa facultad, por lo menos en la proporción que allí se establece. Me parece que la experiencia del primer año de vigencia de esta ley, demostrará a la Junta Reguladora que no será necesario recurrir en una medida muy acentuada a ese remedio heroico, y que también se podrán atenuar en buena parte las otras medidas que pueden presentar un cierto aspecto de medidas monopolistas y que en realidad son remedios de emergencia que nadie espera adquieran carácter de permanentes.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Roberto J. Noble.

El problema capital en este instante podemos reducirlo a pocas palabras: la industria vitivinícola tiene un gran excedente de producción, una cifra muy cercana a la necesaria para abastecer el consumo de dos años en el país, si ese consumo se mantuviera en el nivel que tuvo en el año 1933 ó 1932. Por otra parte, ese excedente de vino ha traído la caída de los precios, a punto tal que los productores de vino están vendiendo a pérdida, no recuperan los gastos de elaboración, y por lo tanto el productor de uva no consigue para su producto un precio que pueda compensarle de los gastos de cultivo, y mucho menos que le alcance para cubrir los gastos de subsistencia; el propietario de la viña no puede servir los intereses de su deuda ni atender tampoco el pago de los impuestos y demás gabelas.

Si siguiera esta situación sin que se le encontrara un remedio inmediato, tendríamos dentro de pocos meses la caída total de la industria, caída que no sólo importaría la ruina de los propietarios de viña, la ruina de los productores de vino y la ruina del comercio, sino también un contraste muy serio para los bancos oficiales y particulares que han sustentado la vida de esta industria. Una víctima en gran escala sería el Banco Hipotecario Nacional que, como es notorio, tiene invertidas apreciables sumas en préstamos sobre viñedos, en toda la zona vitivinícola.

Es también notoria la situación en que se encuentran esos deudores, que habiendo sido durante muchos años los mejores clientes del Banco, los que servían con más puntualidad sus intereses y amortizaciones, hoy en día están con el mayor atraso. Se puede afirmar globalmente que la deuda con el Banco Hipotecario está atrasada en Mendoza en un 20 por ciento.

Si tal es la situación de la industria, si tal es el peligro que la amenaza, ¿cómo podríamos apuntalarla para que salga de la situación crítica y vuelva al nivel de normalidad?

Se han indicado diferentes medidas.

Una, que podríamos llamar de emergencia, trata de eliminar temporariamente del mercado parte del stock de vinos para que no esté gravitando sobre el precio, produciendo una caída por debajo del nivel normal; otra, tiende a la eliminación de materia prima, para que la elaboración pueda ser más reducida y por tanto darle mayor salida al stock vinícola excedente; y, por fin, la que el Poder Ejecutivo, haciendo suyo en esa parte del informe del señor Liaudat, califica como el remedio de fondo: la extirpación de viñas o la substitución de ese cultivo por otro que sea de rendimiento económico mayor.

La mayoría de la comisión, entiendo que lo que, en realidad, debe hacerse en esta materia, es lo que constituye la esencia de su despacho: nombrar una junta reguladora encargada de completar el estudio del problema, de adoptar con la mayor premura posible las medidas del caso, dotándola del máximo de facultades dentro de precisas orientaciones generales, confiando en que la ilustración y el patriotismo de los miembros de esa junta han de producir la acción requerida con el mayor acierto.

El artículo 1º del despacho se refiere a la creación de la junta y del organismo asesor.

Se ha optado por una junta de pocos miembros para que pueda ser más ágil en su funcionamiento y más eficaz. A indicación de un representante del sector socialista, la comisión, por unanimidad, aceptó la garantía de que el nombramiento deba hacerse con acuerdo del Senado.

El organismo asesor estará compuesto, no solamente por representantes de los gobiernos de las provincias afectadas directamente, sino también por representantes de los distintos intereses en juego, representantes, por lo tanto, de los productores de la materia prima, de los viñadores y por representantes de los bodegueros; y al mismo tiempo se ha querido incluir a representantes del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional, porque, como ya dije antes, los intereses de estas dos instituciones están seriamente afec-

tados por el grave problema vitivinícola. En el seno de la comisión se hizo una indicación por el señor diputado por Santa Fe, ingeniero Noble, en el sentido de que en la junta ejecutiva tuvieran asiento también los representantes de esos dos bancos; pero esa iniciativa no fué aceptada, porque se pensó por la mayoría de la comisión que era preferible que los miembros de la junta estuvieran por encima de todos los intereses en juego y fuesen los intérpretes del interés general de la Nación, sin estar vinculados directamente a ninguno de los otros intereses parciales, que, en este caso, integran el interés general del país. Se optó, entonces, por darles asiento en la comisión asesora, entendiendo que la opinión de los representantes de esos bancos será indispensable para el funcionamiento de este organismo.

El artículo 2º ha sido ampliado con respecto al proyectado por el Poder Ejecutivo, tratando de concretar lo más posible las facultades que se acuerdan a la Junta Reguladora de Vinos y agregándole algunas otras que tienen un hondo significado para el porvenir de la industria.

En los incisos a), b) y c), se reproducen las facultades que tenían proyectadas por el Poder Ejecutivo, respecto a la posibilidad de otorgar indemnizaciones a los agricultores que se acojan a la extirpación de la viña o a la sustitución del cultivo. En el inciso b) se contempla el caso de la compra de materia prima y en el inciso c) se autoriza a la junta para la adquisición de los excedentes de vino con carácter temporario para ser dispuestos luego, a medida que las necesidades del consumo los requieran, por medio de la reventa a los propios bodegueros. En el inciso d) se ha querido establecer con claridad la necesidad de que la acción de esta Junta Reguladora se concierte con la acción de los gobiernos provinciales para la consecución de las finalidades que se propone la ley, por eso autoriza a la junta para concertar convenios con los gobiernos de las provincias productoras de vino, a fin de que la acción federal

pueda ser totalmente eficaz al no ser obstruída en forma alguna por la acción que, con muy buena intención, pudieran querer desarrollar aisladamente las provincias.

Así podrá haber un tratamiento uniforme para todas las cuestiones vitivinícolas del país, por medio de este organismo central nacional, que obrará no sólo en los territorios nacionales con absoluta libertad, sino también en las provincias mediante los convenios que se celebrarán, para que exista así una uniformidad completa en cuanto a los medios de acción y en cuanto a la orientación general.

Y por fin va el inciso e), que incluye una cláusula que formaba parte de casi todos los proyectos de ley de vinos y que está en el despacho producido últimamente por la Comisión de Industrias y Comercio. Este inciso fué sugerido a la comisión por un representante del sector demócrata progresista, el doctor Vionnet, y la subcomisión primero y la comisión después, lo aceptó unánimemente porque concuerda en que es uno de los medios más eficaces para poder impedir o poner trabas al estiramiento de los vinos. La fijación de la época de cosecha a que se refiere este inciso, en una forma obligatoria, para las distintas regiones vitivinícolas, sujeta naturalmente la reglamentación del caso, podrá ser uno de los medios más eficaces, como decía, para impedir que por medio de la cosecha tardía se consigan caldos de alta graduación alcohólica que permitan hacer el estiramiento de los vinos en la propia bodega.

Los inconvenientes que puede traer la aplicación de esta disposición, son, a mi juicio, fácilmente subsanables, porque la reglamentación tendrá que hacerse cargo, naturalmente, de las diferencias que por razones climáticas existen entre los distintos zonas, dentro de cada región vitivinícola; también tendrá que hacerse cargo de la distinta calidad de las uvas y, entonces, podrá establecer una fecha para el comienzo de la cosecha y otra fecha para la terminación como límite máximo, y dentro de estos dos límites podrá prever

la reglamentación de todas las necesidades de carácter parcial, para contemplar estos y los demás aspectos que encierra el problema.

En cuanto a los artículos que se refieren a la financiación de este proyecto, me bastará decir que, en primer término, se ha tenido como orientación este concepto: los gastos que puede demandar el plan regulador de la industria vitivinícola deben ser soportados por la propia industria por una razón elemental. La solidaridad de la industria debe hacerse efectiva, especialmente en estos momentos de crisis, y deben concurrir todos los elementos que la componen a suministrar los fondos con que la solución ha de poderse instrumentar; pues, así como es perfectamente aceptable el principio tan defendido por los socialistas de que debe haber una solidaridad en las ganancias, que las ganancias del capitalista deben llegar hasta el labrador, indudablemente también debe haber una solidaridad en las pérdidas, y por eso es que no se ha querido presentar este proyecto con el aspecto de una ayuda del tesoro federal para una industria o por gestión de determinados grupo de intereses, sino como un plan que ha de instrumentar una solución para un momento crítico de la industria, pero financiado con fondos provenientes de la misma industria. Y con este otro concepto complementario, de que la industria no sólo se compone del cultivador, del elaborador, del comerciante y del transportador, sino que también, es un elemento integrante de la industria, el consumidor.

Hemos creído, entonces, que no hay ningún inconveniente en crear una sobretasa que suministre los fondos necesarios para hacer frente a la amortización y el servicio de intereses del dinero que sea necesario movilizar para poder llevar a cabo la acción que esta junta debe realizar.

No quiero extenderme más, a fin de dar tiempo a que puedan hacer uso de la palabra otros señores diputados que desean intervenir en esta materia. Quiero, simplemente, afirmar que esta ley,

que encierra el concepto básico de que la economía nacional es una sola y que la acción federal debe ir en socorro de cualquiera de los elementos que la componen, esta ley será un precedente valiosísimo para poder afrontar, estudiar y resolver los problemas de otras industrias que necesitan, evidentemente, la atención del gobierno federal y del Congreso de la Nación.

Que sirva este precedente para abrir un camino fecundo en las actividades legislativas del país y que sirva también de experiencia para saber que toda industria debe proporcionar por sí misma, dentro de lo posible, los elementos con que se deben combatir y resolver los graves problemas que puedan presentarse en el porvenir.

Para terminar, deseo referirme a una objeción que he visto repetida en algunas publicaciones, de que éste es un proyecto que encierra ideas o conceptos monopolistas y que no podrían tener eficacia en la práctica porque la experiencia ha demostrado que todo recurso de carácter monopolista está destinado fatalmente al fracaso.

No hay aquí ningún propósito de carácter monopolista. Si se analizan los artículos de la ley, si se analizan los fundamentos dados por el Poder Ejecutivo y se estudian con alguna serenidad los datos proporcionados por los distintos documentos a que me he referido, se verá que la finalidad perseguida es la regularización de una industria que ha sufrido un desequilibrio, buscando impulsarla por los medios normales que la economía clásica aconseja, vale decir, tratar de que la oferta se compense con la demanda y responda a las necesidades de esta última, que no haya ni exceso de producción ni subconsumo; no se trata de usar medios de carácter monopolista que tiendan a beneficiar a una parte de la industria, al capital, sino que se proponen medidas que tiendan a consolidar, a sanear, a infundir mayor vigor a una industria que, en este instante, está debilitada y en peligro de desangrarse por completo.

Dejo así fundado el despacho en mayoría y espero que los señores diputados comprendan que no viene este representante de Mendoza a solicitar un apoyo directo, un beneficio exclusivo para la provincia que representa, sino que viene a fundar un proyecto de ley que contempla y resuelve los intereses generales de una industria nacional.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Pena. — Pido la palabra.

Cualquier cosa podría haber supuesto menos que a esta hora debiera informar en disidencia el despacho que se considera. Mis apuntes estaban esperando un momento de tregua para la ordenación consiguiente, y formular una exposición que comprendiera los aspectos generales que debo tocar ahora.

Una verdadera paradoja hace que yo, abstemio total, deba ocuparme nada menos que del vino; pero en la división del trabajo que se ha hecho en el grupo parlamentario, me ha correspondido esta tarea y he debido, hombre disciplinado, tomar a mi cargo el entrar en un asunto por el cual nunca he tenido, ni una exagerada indiferencia, ni ~~tampoco~~ una grande o profunda antipatía.

He visto que en el mundo hay gente que toma vino, que con él ahoga las penas y como en realidad, vivimos en un régimen donde el dolor es tan enorme, si esto puede llevar un consuelo a alguien en algún momento — y ahora casi todos los momentos son de congoja — debemos mirar estas cosas con cierta discreción y no llevar adelante una campaña aguda o virulenta contra ese consumo.

Somos hombres de un partido que ha desarrollado una lucha antialcohólica activa. Recuerdo desde mis primeros años la propaganda tenaz, insistente, de la Sociedad Luz, cuyo presidente, doctor Giménez, ha organizado conferencias numerosísimas acerca de las consecuencias que tiene para el organismo humano el abuso del alcohol y, por eso, en cierto modo, me he desenvuelto dentro de este ambiente. En mi familia tampoco hemos tenido el ejem-

plo del uso del vino, y hasta este momento he visto tomar vino como he visto fumar y hacer muchas cosas inútiles, inconvenientes y perjudiciales, sin abrir juicio u opinión acerca de lo que hace la gente. Hay tanta gente que hace cosas que no debe hacer, que prácticamente sería muy difícil vivir continuamente echando en cara a la gente lo que hace. Así no podría vivirse.

Entrando ahora a considerar el problema declaro, de entrada, que me encuentro con grandes dificultades. Como creo que todo puede ser traducido en cifras para tener una idea exacta de la realidad, he querido ir a las cifras y me he acordado una vez más de aquella frase de Disraeli que dice, que hay tres grados de deformación de la verdad: la mentira, la calumnia y la estadística. En lo que respecta al vino, la estadística confirma plenamente la frase.

Voy a dar informes oficiales. El informe que acaba de citar el señor diputado por Mendoza, del doctor Liaudat, dice en cierto pasaje, lo que los señores diputados van a oír: «Desgraciadamente, la única seria estadística de superficie plantada en todo el país, con que se cuenta, dista mucho de ser buena. Hemos juzgado necesario afirmarlo categóricamente, demostrándolo, para evitar se sigan haciendo comparaciones sobre bases falsas y se arribe a conclusiones equivocadas, confundiendo estérilmente la opinión de los interesados y del país. No hay duda, pues, que esas cifras carecen en absoluto de valor, siendo conveniente que el Ministerio de Agricultura las elimine de sus archivos.»

Sr. Vicchi. — ¿Si me permite una interrupción?

No concreta el señor diputado a qué citas se refiere.

Sr. Pena. — Se refieren — el señor diputado no habrá percibido — al área sembrada con vid.

Sr. Vicchi. — ¿Se refieren a las estadísticas del Ministerio de Agricultura?

Sr. Pena. — Es lo que estoy leyendo.

Sr. Vicchi. — Es lo que quería que quede subrayado.

Sr. Pena. — Continúo: «Es preferible no tener estadísticas a tenerlas malas». Y agrega más adelante otra opinión que tiene alguna importancia para lo que estoy refiriendo: «Es de toda oportunidad señalar como una causa importante de los males que se sufren, la carencia de estadísticas serias, ordenadas y completas de los diversos aspectos de la industria. Llama poderosamente la atención, que la Dirección de Impuestos Internos, encargada del control de la industria y con todos los elementos a su alcance, no se haya munido en forma sistemática de las cifras necesarias para seguir, paso a paso, la evolución como medio de perfeccionar la tarea a su cargo.»

Esto, por lo que se refiere a la cantidad de hectáreas plantada con vid. Vayamos ahora al consumo. El informe a que me vengo refiriendo, dice que el consumo normal es de 7.000.000 de hectolitros y que la producción alcanza, dividida por las provincias productoras, a 8.300.000. La Sociedad Vitivinícola de Mendoza, dice: «Con un coeficiente del año normal, 1930, el país necesitaría 12.000.000 de hectolitros, para lo cual necesitaría plantar 30.000 hectáreas más de viña». Es decir, que por el despacho que consideramos habría que destruir 15.000 hectáreas de viña y según informes que vienen de Mendoza, habría que plantar 30.000 hectáreas más.

Sr. Godoy. — Está completamente equivocado el señor diputado.

Sr. Pena. — Doy la fuente de mis informaciones. No tengo ninguna hectárea de vid ni ninguna damajuana de vino. Doy las cifras oficiales que encuentro y cito sus fuentes, porque no deseo sorprender la opinión de los señores diputados con informaciones arbitrarias...

Sr. Godoy. — La discrepancia proviene...

Sr. Pena. — La discrepancia proviene de muchas causas. No entremos a la investigación de los factores que la de-

terminan. En este momento sólo me interesa señalarla.

Se ha querido levantar el cargo que reiteradamente hemos hecho en el sentido de que la industria del vino es típicamente oligárquica. El diputado que quiso levantar el cargo ha presentado inocentemente este despacho, como respondiendo a la necesidad de salvar a algunos millonarios: Fulano, Zutano y Perengano se han hecho millonarios, ahora están mal y la ley tiene que salvarlos. Si algo ha dicho el señor diputado es eso.

Sr. Godoy. — No es eso.

Sr. Pena. — Lea la versión de su discurso.

Sr. Godoy. — Es una interpretación muy libre de mis palabras.

Sr. Pena. — Es la interpretación exacta de sus palabras. El señor diputado dió varios nombres de millonarios que se han enriquecido con su trabajo, y que ahora están a punto de arruinarse. Entonces hay que poner 30.000.000 de pesos de la Nación para seguir manteniéndolos millonarios.

Sr. Godoy. — Eso va por cuenta exclusiva del señor diputado.

Sr. Pena. — Al señor diputado por Mendoza no lo he interrumpido.

Doy a sus palabras la interpretación que, estoy seguro, es la que hará todo el que lea la versión de su discurso, a menos que sus palabras hayan traicionado su pensamiento.

Sr. Godoy. — Es posible que mis palabras hayan traicionado mi pensamiento, pero el señor diputado no me negará el derecho de interpretar mis propias palabras, porque nadie mejor que yo sabe qué he querido decir.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — El señor diputado por la Capital desea no ser interrumpido. El señor diputado por Mendoza puede anotarse en la lista de oradores, si desea hacer alguna aclaración.

Sr. Pena. — Hay que salvar a los millonarios, según el señor diputado.

Sr. Graffigna. — Ha dicho que hay que salvar todos los intereses vinculados a la industria del vino.

Sr. Pena. — Si el señor diputado por San Juan, que tiene intereses en el vino, y si todos los diputados que tienen intereses en el vino van a interrumpirme, mi discurso será interminable.

El señor diputado ha visto la buena voluntad con que se ha colaborado y así se ha incorporado a la ley de impuestos internos la disposición relativa al dumping interno — con la que estamos de acuerdo — y debe, ahora, colaborar con su silencio para no alargar mi exposición.

Se ha querido destruir el argumento de que esta es una industria oligárquica, que tiene procedimientos típicos de monopolio, que se rige por la gravitación excesiva de grandes intereses de los capitalistas más poderosos, invocando precisamente la situación de aquellos millonarios a quienes hay que apuntalar.

Ya cuando se designó la comisión especial para investigar la existencia de trusts, en la primera página del informe redactado por el doctor Justo, se decía lo siguiente: «Al exponer los resultados de nuestra investigación sobre los trusts, damos el primer lugar al vino por encontrarse la producción y el comercio de este artículo dominada por el organismo monopolista más típico que existe en el país y el de existencia más evidente, pues ha sido engendrado por leyes de una provincia argentina y vive regulado por ellas. Es también el caso que pone a prueba, desde luego, la sinceridad y la firmeza del gobierno argentino en la lucha contra los trusts, pues el trust del vino se ha formado al amparo de leyes nacionales que pueden reformarse en cualquier momento y con la protección de institutos nacionales de crédito, cuyas operaciones están bajo el control indirecto pero decisivo del Poder Ejecutivo.»

Este asunto se ha tratado en la Cámara infinidad de veces, en diversos años. No deseo, en esta parte, hacer una reseña completa de los antecedentes de la industria hasta llegar a su estado

actual. Creo, sin embargo, que convendrá dejar algunos jalones para que las cosas aparezcan en la exposición, tal cual son.

En un dictamen de la Comisión Nacional de la Industria Vitivinícola del año 1932, se hace un resumen esquemático de esa evolución y se señala la crisis del año 1902 a 1904, como teniendo por causa principal la especulación industrial y comercial que se hacía con el vino.

A la segunda crisis, del año 1914, se la señala por el desarrollo de esa industria, favorecida por la conquista del mercado interno para el vino de Cuyo y por la liberalidad de créditos acordados por las instituciones bancarias oficiales. «Alentados por el gran rendimiento de los viñedos y el precio de la uva, hubo muchas personas que hicieron uso de los créditos y plantaron grandes extensiones, sin preocuparse, sin embargo, de hacer la correspondiente bodega. Este hecho dió origen al *terrateniente viñatero* — sobre el cual habremos de volver después con las únicas cifras estadísticas que hay sobre el punto — que, como vemos, ha sido indirectamente el factor principal de la crisis sufrida por la industria vitivinícola cuyana».

Luego de hacer relación de las distintas leyes provinciales dictadas para conjurar esa crisis y que dieron por resultado la destrucción de viñas y el derrame del vino en las acequias, se establece que en virtud de la ley número 655, de Enero de 1915, por imperio de esa ley — suprimo las facultades y voy al resultado — se derramaron 117.000 hectolitros y se eliminó el fruto de 16.500 hectáreas de viña, por un valor de 5.125.000 pesos. De acuerdo con los datos estadísticos, durante los tres años de vigor de esa ley, quedó sin elaborar uva por valor de 3.753.840,59 pesos en el año 1917, de 7.648.713 en el año 1918, y de 2.239.476,55 en el año 1919.

Luego, viene un período intermedio y se refiere al año en que por la helada de 1926 hubo una enorme disminución de la producción de uva, lo cual no fué

óbice para que la producción de vino siguiera como siempre.

La comisión a que me refiero establece que eso provocó una reacción artificiosa, que poco duró, pues «numerosos industriales de Mendoza poco escrupulosos»... Habría que establecer si los que están hoy son mejores.

Sr. Biancofiore. — Es lo mismo. *(Risas)*.

Sr. Corominas Segura. — Hay buenos y malos, como en todas partes.

Sr. Vicchi. — Hay buenos y malos como en todas partes. Depende de las medidas que tome el poder público.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Ruego a los señores diputados que no interrumpen.

Sr. Pena. — Deseo no ser interrumpido, porque estoy refiriéndome a datos oficiales.

Se refiere este informe a numerosos industriales de Mendoza poco escrupulosos; de manera que hay muchos industriales de pocos escrúpulos. Me refiero a datos oficiales de hace dos años y me pregunto si ha ocurrido algo, si aquella gente tiene ahora más escrúpulos que antes.

Llegando ya al período actual, hay una serie de datos respecto a la evolución de la industria. Se habla de las leyes dictadas en Mendoza y en San Juan en los años 1930 y 1931, y se llega a la conclusión de que de acuerdo con esos planes de emergencia, alrededor de 5.000.000 de quintales métricos, por valor de 32.500.000 pesos, han sido destruidos para mantener los precios del vino.

Para poder hacer todo esto tiene que existir una gravitación excesiva, poderosa y decisiva, de grandes capitales financieros que pueden imponer en la marcha de esta industria condiciones de funcionamiento.

Acabamos de hacer la unificación de los impuestos internos. El ministro de Hacienda, cuya ausencia lamento porque firma con el ministro de Agricultura el mensaje, ha hablado con alguna pasión acerca de la paternidad de aquella iniciativa; pero quiero recor-

dar que hace muchos años fué propuesta, respecto del vino, una solución por el diputado Enrique Dickmann. En 1917 propuso que se creara un impuesto interno nacional de tres centavos al vino, que si se hubiese aceptado en aquella época es seguro que se habría evitado en buena parte lo que sucedió en las provincias productoras de vino: que elevaron su presupuesto a cifras que en algún momento rayaron en el escándalo más alto.

El diputado Dickmann, contestando algunas objeciones que al proyecto hacía el diputado Silvetti, representante por Mendoza, decía en aquel entonces: «Al impuesto al vino no se opone en realidad el gobierno de Mendoza, sino que lo quiere guardar para sí. En nombre de la solidaridad nacional, el gobierno de Mendoza quiere imponer o impone y cobra, un impuesto a todos los consumidores de vino de la República; y nosotros, en nombre de la solidaridad nacional, queremos que este impuesto lo cobre el gobierno de la Nación».

Estas palabras, dichas hace 17 años, son en buena parte las que han culminado con la iniciativa que acabamos de votar y que, de haberse tenido en cuenta antes, habrían adelantado en mucho la legislación en esta materia.

Y agregaba el diputado Dickmann: «En la provincia de Mendoza, en los últimos años, debido a la gran especulación, se ha elevado el precio de los terrenos. Este fenómeno se ha debido al gran rendimiento por hectárea de viña, que permitía al dueño sacarle una alta renta. Se obtenía más de mil pesos de ganancia líquida por hectárea de viña plantada, y por año. Esto se debía principalmente, a la protección aduanera nacional al vino mendocino, que impedía la entrada del extranjero del vino popular.»

Para manejarnos en el desenvolvimiento de esa industria no disponemos de datos oficiales muy precisos. Los propios datos que últimamente conocemos por el informe elevado al Ministerio de Agricultura, hay que tomarlos con cier-

ta reserva, porque se trata de un estudio de conjunto en el cual se toman todos los elementos y se llega a promedios.

Evidentemente, un promedio es algo que tiene valor, pero que no autoriza a sacar conclusiones definitivas para resolver las cuestiones; no basta para legislar sobre su base. En Mendoza, como se sabe, hay plantaciones de viñas completamente viejas, cuyos propietarios no se cuidan de mejorarlas y que sacan un rendimiento miserable de 10 ó 20 quintales. Si se suman los dos extremos se llega a un promedio, y se considera razonable que la despreocupación de ciertos propietarios haga bajar los promedios influyendo de esta manera en forma decisiva en la legislación vitivinícola.

Me parece, pues, un sistema peligroso.

En este asunto del vino hay un aspecto que tiene que hacer con esa afirmación del informe de la Comisión Nacional Vitivinícola del año 1932, cuando habla de numerosos industriales poco escrupulosos.

Es lo que yo expresé en la comisión, de que esto, más que un problema de vino, es un problema de agua, porque algunos que no están en el secreto de esta industria, cuando oyen hablar de estiramiento del vino, como tienen la idea de que se estiran las cosas sólidas y que las líquidas no pueden estirarse, desde que toman la forma de los recipientes en que están contenidos, se les hace un poco difícil entender esa operación. Habría que emplear la expresión técnica, que es la de «hidratación de los mostos», que es una cosa más elegante, más técnica, pero que quiere decir lo mismo que el estiramiento: echarle agua al vino. Esto es lo más claro.

Veamos las conclusiones a que llegó esa comisión.

Esa comisión dice que en la región de Cuyo — provincias de Mendoza y San Juan — se echa al vino, por año, 686.900 hectolitros de agua y el comercio, para no ser menos — es comercio —, le agrega una cantidad aproximadamente de 687.450 hectolitros de agua.

Sr. Corominas Segura. — Si me permite el señor diputado una interrupción...

Sr. Pena. — Podrá hablar después el señor diputado. Yo doy datos oficiales y el señor diputado tendría que contradecir entonces datos oficiales.

Sr. Corominas Segura. — No son oficiales, son afirmaciones personales.

Sr. Pena. — Son datos del Ministerio de Agricultura de la Nación, Dirección de Comercio e Industrias, Paseo Colón 974.

Sr. Corominas Segura. — Son afirmaciones personales de los escasos miembros de la comisión que quedaron, comisión que se suprimió.

Sr. Pena. — Son datos que tengo, cuya fuente doy a la Cámara.

Sr. Corominas Segura. — Yo voy a dar la fuente...

Sr. Pena. — Yo declaro al señor diputado que por mi parte creo que si el agua no fuera mala o contaminada, lo grave de la acusación es que algunos dicen que el agua de Mendoza que se le agrega contiene algunos principios inconvenientes y que es mejor el agua de la Capital, porque es filtrada...

— Los señores diputados Corominas Segura y Vicchi interrumpen al orador, no percibiéndose sus palabras.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Prevengo a los señores diputados que el señor diputado por la Capital no desea ser interrumpido.

Sr. Vicchi. — El señor diputado padece de la manía bacteriológica.

Sr. Pena. — No padezco de ninguna manía. En cambio el señor diputado padece de la manía vitivinícola, lo que es mucho peor. Es mucho más saludable tener alguna preocupación bacteriológica.

La suma de esas dos cantidades de hectolitros de agua que se agregan al vino, dan las siguientes cifras que impresionarán a la Cámara. Cada año se agregan al vino de Cuyo, según este informe, 1.374.350 hectolitros de agua, vale decir que salen 687.450 bordelesas

de 200 litros cada una, de agua, desparramadas en todas las otras bordelesas que llevan vino.

Esta es una cosa que algún señor diputado querrá contradecir, pero vamos a tomar algunos otros informes y veremos si alguna vez con las estadísticas nos ponemos de acuerdo. Impuestos Internos dice que en 1933 a la elaboración de vinos genuinos de Mendoza corresponde una cifra de 633.766.661. Por esta publicación, «Boletín Agrícola — Ministerio de Industrias y Obras Públicas — Mendoza, República Argentina, año II, número 1, Enero 1934», en Mendoza la cantidad de vino que paga impuesto es 572.278.176. Está comprobada así la cantidad de agua que Impuestos Internos considera como vino, y que en Mendoza todavía no es vino. Más claro, agua; y me parece que tiene demasiada...

¿Cuál es la situación actual de la industria? Con la unificación de impuestos internos podríamos considerar resuelta la cuestión, sin que la Cámara tuviera por qué perder tiempo con este despacho. Esa ley suprime una cantidad de gravámenes provinciales a los vinos, y favorece el expendio del vino de Mendoza otorgándole ventajas que hoy no tiene y creando dificultades a algunas regiones del país donde, por no haber gobiernos que encuentren en la industria del vino la fuente de cuantiosos recursos, no está gravada la industria en forma tan exorbitante como en Mendoza y en San Juan.

Interesa dar estas cifras al respecto. Los presupuestos de Mendoza y de San Juan suman aproximadamente 45.000.000 de pesos. Tomando la producción de vino en 6.000.000 de hectolitros, a 15 centavos, son 90.000.000. La mitad del importe de este precio del vino es pagada como impuesto para costear los dos presupuestos de estas provincias.

La Nación ha tenido la ocurrencia de favorecer y estimular con riego a algunos lugares apropiados para el desarrollo de ciertos cultivos. Con dineros de rentas generales se han hecho construcciones costosas que aumentaron enormemente el valor del suelo en

algunas regiones del país. Los propietarios se resisten tenazmente a admitir que deban ser gravados por la Nación, y los representantes de las provincias consideran totalmente fuera de las facultades de la Nación la fijación de impuestos a esos propietarios que han visto aumentado así el valor de su suelo, a pesar de que reclaman todos los días que la Nación lleve dinero para hacer obras que aumenten el valor del suelo.

Se han hecho, como decía, importantes obras de riego en los territorios y en algunas provincias. En los territorios no hay impuesto al vino, y las plantaciones de vid han venido desarrollándose año tras año, aprovechando esa gran ventaja que deriva de la ausencia de los impuestos que las provincias productoras hacen incidir sobre el vino. En Río Negro las hectáreas han pasado de 2.365 en 1925 a 6.524 en 1930 y a 9.214 en 1933; y en Neuquén, de 80 hectáreas en 1926, a 201 en 1930 y a 469 en 1933. Algo parecido, aunque en cifras que no he podido obtener porque he carecido de tiempo para completar mi información, por estar ocupado en la Comisión de Presupuesto, ha ocurrido en Jujuy donde se ha hecho un gran dique con gran costo, y también se desarrolla alguna plantación de vid aprovechando del riego de esa gran obra hidráulica. Pero la industria que nos interesa considerar en este momento es la de Mendoza. La unificación de los impuestos internos va a incidir en contra de todas las regiones del país productoras de vino, favoreciendo, en primer término, a Mendoza y a San Juan. Creo que la unificación de los impuestos internos se ha hecho teniendo en vista principalmente los intereses de esas provincias.

Vamos a ver cómo está constituida esa industria en las provincias de Cuyo. En el mundo la industria vitivinícola no ha tomado el desarrollo que tiene en nuestro país. Por lo general es una industria limitada. Se trabaja en unidades de superficie de media o una hectárea. No se conciben viñedos de decenas ni de centenares de hectáreas

y mucho menos de mil hectáreas, como en nuestro país. Veamos las estadísticas. He preguntado en la Biblioteca del Congreso si había algún anuario estadístico de Mendoza y se me ha dicho que no había ninguno. Después he averiguado que había un anuario del año 1926.

Sr. Vicchi. — ¿Esas son las informaciones que tiene sobre la estadística de Mendoza el señor diputado?

Sr. Pena. — Yo he dicho que he preguntado en una biblioteca nacional, como es la del Congreso.

Sr. Vicchi. — Pero esa deficiencia de información podrá ser por culpa de la Biblioteca del Congreso, pero no puede atribuírsela a la provincia de Mendoza.

Sr. Pena. — Yo he preguntado en esta casa, porque es evidente que no he tenido tiempo para ir a la provincia de Mendoza a consultar este punto, en sus oficinas técnicas o administrativas.

Sr. Corominas Segura. — Hubiéramos tenido el mayor gusto en facilitar al señor diputado los elementos que hubiera solicitado al respecto.

Sr. Pena. — Lo agradezco, pero no tengo ningún gusto en que se me interrumpa, y quisiera que el señor diputado tuviera el mayor gusto en acceder a lo que le pido.

Tengo en mis manos la estadística de Mendoza, publicada en 1926. No sé si hay otra posterior y ahora le rogaría al señor diputado me dijera si existe.

Sr. Corominas Segura. — Existe una del año 1933.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Invito al señor diputado a dirigirse a la Presidencia.

Sr. Pena. — Lamento no haber tenido oportunidad de consultar esa estadística.

Sr. Corominas Segura. — Cuando yo lo interrumpí, quise decirle que nosotros habríamos puesto complacidos esos elementos a su disposición para facilitarle su estudio.

Sr. Pena. — Muchas gracias, pero ya es tarde.

Sr. Corominas Segura. — También es tarde cuando el señor diputado lo pide.

Sr. Pena. — Yo he tomado las cifras correspondientes a 1926, pero voy a ocuparme de buscar el anuario de 1933, y lo voy a leer, ya que se me ha impuesto la obligación de estudiar este asunto.

Las cifras del anuario de Mendoza del año 1926 arrojan estas conclusiones, número de viñateros o parcelas: hasta 5 hectáreas, 3.281; de 6 a 10, 975; 11 a 15, 437; 16 a 20, 298; 21 a 25, 176; 26 a 30, 118; 31 a 40, 156; 41 a 50, 86; 51 a 75, 111; 76 a 100, 61; 101 a 150, 46; 151 a 200, 13; 201 a 300, 15; 301 a 400, 3; 401 a 500, 2 y más de 500 hectáreas, 2.

En resumen, agrupando estas cifras se llega a esta conclusión: más de 65 por ciento de las parcelas indicadas en el anuario estadístico, corresponden a superficies de más de 50 hectáreas. Pero debe observarse que se habla de parcelas y no está excluido que haya muchas parcelas divididas a los fines del cómputo, pero que son del mismo propietario. Así se explica lo que todo el mundo sabe, de que en Mendoza hay quién tiene más de 1.000 hectáreas, quién tiene 1.500 y 1.800 hectáreas.

Sr. Vicchi. — Hay una sola firma en Mendoza en esas condiciones.

Sr. Pena. — Otro tanto ocurre si uno toma del Anuario Estadístico de Mendoza las cifras correspondientes a las bodegas. Según el censo levantado en 1923, había capacidad de bodega de 7.855.571 hectolitros, y el año 1926 se calculó en 9.000.000 de hectolitros. Pero, yo que he tabulado las cifras parciales, me he encontrado con esta sorpresa. En el caso de las plantaciones de vid, he tomado el promedio entre dos cantidades que se citan y he multiplicado por la cantidad de parcelas que se adjudican, para encontrar en cada caso la superficie total y luego llegar a la conclusión de que más del 65 % son parcelas con más de 50 hectáreas.

Pero en el caso de las bodegas el asunto ya no lo entiendo, porque hay de 371 elaborados con capacidad de 1 a 500 hectolitros; 172 de 501 a 1.000; 363 de 1.001 a 5.000; 93 de 5.001 a 10.000;

34 de 10.001 a 15.000; 17 de 15.001 a 20.000; 14 de 20.001 a 25.000; 9 de 25.001 a 30.000; 9 de 30.001 a 35.000; 1 de 35.001 a 40.000; 4 de 40.001 a 45.000; 5 de 45.001 a 50.000; 1 de 50.001 a 55.000; 1 de 65.001 a 70.000; 2 de 101.000 a 150.000 y 1 de 150.001 a 250.000 hectolitros.

De manera que hasta 10.000 hectolitros de capacidad hay elaboradores por 1.625.000 y de una capacidad superior a 10.000 hectolitros, 2.597.500 hectolitros. Si se toma los máximos indicados en la planilla y se multiplican por el máximo de la capacidad en cada caso, da una suma muy inferior al total que aparece enunciado en ese compendio estadístico de Mendoza.

Sr. Godoy. — Si el señor diputado me permite, agregaría unas cifras respecto a la producción mundial.

Sr. Pena. — No, señor diputado; nosotros no exportamos a ninguna parte, ni dejamos venir nada de ninguna parte. Nos desarrollamos en un ambiente donde el azúcar no se puede recibir del extranjero, ni tampoco el vino. ¿Para qué hacer un paseo sin objeto por países extranjeros? Sigamos en la Argentina que es más conveniente.

Sr. Godoy. — Era para completar...

Sr. Presidente (Noble R. J.). — No puede interrumpir el señor diputado por Mendoza.

Sr. Pena. — Me he referido antes, con documentos oficiales, al asunto del agua, porque tiene importancia singular esta cuestión. ¿Por qué se le puede poner agua al vino? Normalmente observo que es lo que hace mucha gente; le pone un poco de agua, aunque hay algunos que toman cosas de graduaciones muy superiores a la del vino, y no le ponen agua, esto es, las toman directamente como agua. Pero la verdad es que si yo me he referido a ese aspecto es porque tiene una importancia singular en la cuestión que tratamos y deploro que la Cámara ayer haya aceptado modificar el despacho de la Comisión de Presupuesto en cuanto gravaba los vinos con una tasa progresiva de acuerdo con su gradua-

ción alcohólica, substituyéndola por una tasa única para todos los vinos.

Debo declarar que las personas que se han ocupado de estas cuestiones del vino, que no son negociantes, que son hombres de estudio, de preocupaciones por el desarrollo progresivo de la industria del vino, enólogos competentes, hace años que vienen denunciando ese hecho y clamando por que se llegue a dictar una legislación que suprima con el impuesto a la graduación alcohólica del vino, una maniobra que hace largos años se viene repitiendo con el doble perjuicio de los que plantan la vid y de la calidad del producto.

Tengo una comunicación del Centro de Viñateros sin Bodegas, de Russell, Maipú, provincia de Mendoza, en la que se hacen comentarios que tienen atinencia con esta cuestión. Se dice en ella: «Los industriales, salvo algunas excepciones — también las pongo yo — desde hace muchos años se han dedicado a fabricar un vino que contemple el gusto de lo que ellos llaman la clientela, que no son los consumidores sino los intermediarios, que pretenden vino de mucho color y muy alcohólicos, a fin de poder agregar una buena cantidad de agua.» Y agrega después lo siguiente: «A tal grado de corrupción ha llegado la industria que los corredores de algunas grandes marcas recorren la clientela proclamando la alta calidad de sus vinos con demostraciones comprobatorias de que por cada bordelesa de 200 litros se puede agregar fácilmente cuatro damajuanas de agua. Esa calidad se consigue por medio de la fermentación con fuertes dosis de anhídrido sulfuroso, ácidos artificiales de origen vegetal tartárico y cítrico, permitidos por las leyes vigentes, y muchas veces con el agregado de ácido sulfúrico a pesar de la prohibición de su uso.»

Sr. Vicchi. — ¿Me permite?

Sr. Presidente (Noble R. J.). — No puede interrumpir el señor diputado.

Sr. Vicchi. — Le voy a decir...

Sr. Pena. — Yo voy a decir lo que tengo que expresar y el señor diputado dirá todo lo que tenga que decir

después; de manera que le ruego no me interrumpa.

El año pasado el gobernador de Mendoza, Ricardo Videla, con la firma de su ministro E. López Frugoni, elevó a la Legislatura de esa provincia un proyecto de ley de cuyos fundamentos tomo los siguientes que corroboran plenamente lo que estoy sosteniendo en este momento: «A los efectos del impuesto se toma por base dos categorías de vino, los elaborados con uvas frescas y los con uvas estacionadas. Los primeros son el producido de la fermentación de la materia prima tomada en el momento en que todavía no ha experimentado pérdidas por eliminación natural de ninguno de sus componentes. No así los elaborados con uvas estacionadas que han sufrido disminución por evaporación de una parte del agua natural contenida en la uva. Despréndese de ello que estos últimos son productos concentrados y que por lo tanto no pueden estar sujetos al mismo régimen que los primeros. De ahí a la vez la equidad de establecer la diferenciación resultante de la mayor concentración tomada como base el alcohol y el color.» Y hablando del color, agrega: «Pero de nada valdrá la lucha contra el alcohol si no se complementa con la del color. Sabido es que la intensidad del color en los vinos tintos es una de las características más buscadas, a veces más que el gusto, por los comerciantes de vinos, en razón de los manipuleos a que se prestan.»

Dice más adelante: «La ley que propongo tiende a suprimir la lucha permanente entre el viñador y el bodeguero acerca de la época de la vendimia, mediante la fijación de un standard o prototipo de uva en perfecto estado de madurez natural, determinada en 12 grados Beaumé, y dispone que sobre esa base se efectúen las transacciones con los premios de descuentos correspondientes a mayor o menor tenor azucarino y calidad de la uva. Esta medida, combinada con un aumento gradual de impuesto al exceso de alcohol en los vinos, traería como resul-

tado natural y lógico, cosechas razonablemente tempranas.»

El proyecto mantenía el gravamen para cuando la graduación era de 6 a 12; aumentaba el gravamen en un centavo cuando la graduación era de 12 a 13; y en dos centavos, cuando era arriba de 13, teniendo también en cuenta los grados de color, 140 en el primer caso, 140 a 120 en el segundo y abajo de 120 en el tercero.

Es una vieja cuestión que se viene debatiendo desde hace largos años y que en la Cámara se ha planteado en reiteradas oportunidades.

El ex diputado Trianes, por Mendoza, decía lo siguiente en un artículo publicado no hace mucho: «El mito de los vinos robustos de Cuyo está en camino de desvanecerse para dejar como residuo: primero, la comprobación de cosechas tardías en las que las uvas habían ganado en azúcar, y por consiguiente en alcohol lo que perdieron en peso, y el bodeguero enriqueciéndose con lo que perdía el viñador, para enseñarnos después que la fuerte coloración no obedecía sino a maceraciones prolongadas, por las que el vino aumenta su tenor en sustancias extractivas sin mejora de su calidad y para dejar en fin al descubierto el empleo de drogas que hacen necesarias esa concentración de caldos, mediante la cual se ahorra fletes, impuestos y hasta uva, y se pone al alcance del minorista un producto que se puede estirar sin esfuerzo y hasta inevitablemente. Y quedará así en evidencia también lo poco que el país debe a esos pretendidos *pioneers* de la industria cuyana, cuyas bodegas, las más grandes del mundo, no tienen otro origen que la explotación desenfrenada del propietario de la tierra, del transportador, del fisco, del obrero y de la salud del consumidor.»

La legislación del mundo sobre vinos, tomando el molde de la ley francesa, viene desde el siglo pasado, estableciendo el impuesto al vino por su graduación alcohólica. Pero en este país, la lucha de largos años no ha conseguido todavía llegar a término.

Y cuando creíamos el principio definitivamente incorporado a la legislación nacional, nos encontramos con la sorpresa de que en la sesión de ayer se suprime la tasa de impuesto progresivo con relación a la graduación alcohólica y se vuelve a la tasa única sobre todos los vinos.

Voy a dar a la Cámara, porque tiene algún interés respecto del asunto que tratamos, algunas cifras que se han tomado en Mendoza y que se han hecho conocer acerca de la graduación alcohólica de los vinos en una enorme cantidad de muestras tomadas en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, para probar que esa graduación está muy lejos de ser la que se mantiene por razones de estiramiento, con la tasa uniforme, en un nivel excesivamente alto.

En resumen, sobre todas las muestras analizadas en la Capital, que eran en conjunto más de 42, se llegó a la conclusión de que ninguna de ellas tenía una graduación alcohólica superior a 12,90°, y que el término medio de los vinos examinados de la provincia de Buenos Aires, daba aproximadamente, una graduación media de 11 ½ grados.

La industria está organizada, entonces, sobre una base química, con grandes capitales, enormes capitales, con grandes extensiones de viñas, en manos de algunas firmas millonarias, como se ha dicho esta tarde dando los nombres de los *pioneers* o de los hombres que pasarán a la historia de Mendoza, con sus millones, sus viñedos y sus bodegas. Pero no es una industria que se haya ocupado en manera alguna, sino en forma muy limitada, de mejorar la calidad de sus productos.

Un enólogo competente, que ha viajado por el mundo y que hace algunos años viene ocupándose con pasión de estas cosas, haciendo publicaciones reiteradas en las que sostiene sus puntos de vista hasta con alguna pasión — me refiero al enólogo Rafael Trianes — decía en una publicación de hace algunos meses: «Hace buen número de años que venimos sosteniendo la posibilidad de hallar mercado dentro del país a

la producción, no desmesurada aún, de sus zonas vitivinícolas. Precisamente, es ese concepto lo que nos llevó a combatir como disparatadas todas las iniciativas tendientes a solucionar el viejo problema del vino, que envolvían el mantenimiento de precios elevados y se realizaban contando con la destrucción de uva y el derrame del vino. Fué por ello que oportunamente censuramos la formación de la misma sociedad vitivinícola, cuyo plan de emergencia cuesta a Mendoza cerca de 100.000.000 de pesos, y no es otro el fundamento de los trabajos que he consagrado a demostrar que la prohibición de plantar viña y la restricción a la salida de vino compromete seriamente el porvenir de la industria.»

Y el mismo enólogo, hablando de la calidad de la producción de esta industria, dice lo siguiente: «Exceptuada alguna bodega, que no es preciso nombrar, las demás no presentan en nuestro mercado interno sino caldos ordinarios. Serían capaces de hacer otra cosa, pero carecen de aspiraciones porque les basta con producir una bebida que se jactan satisfaga el apenas paladar de «la peonada» y que sin otros dolores de cabeza ha permitido a muchos formar fortuna.»

Omito, señor presidente, dar información acerca de la parte social de la industria vitivinícola. Baste decir, que los que están afectados al trabajo rudo de los viñedos, bajo la orden del contratista, cobran salarios tan ínfimos que hasta por razones de comodidad se resuelve suprimirlos y la gente trabaja por la comida.

Con respecto a lo que se dice sobre la situación de las bodegas y la crisis de los millonarios, veamos algunos datos.

Benegas Hermanos y Compañía Limitada, balance general al 31 de Mayo de 1934: utilidad del año 140.045,49 pesos.

Sr. Arrieta. — ¿Qué capital tiene?

Sr. Pena. — Aquí tiene el balance, puede leerlo.

Sr. Biancofiore. — Debe saber un dato así; debe decirlo.

Sr. Graffigna. — ¡Por qué no cita el último balance de la sociedad anónima El Globo Limitada, que tuvo 900.000 pesos de pérdida?

Sr. Presidente (Noble R. J.). — No pueden interrumpir los señores diputados.

Sr. Pena. — Tomo el dato del Boletín Oficial, 6 de Noviembre de 1934, página 193.

Bodegas y Viñedos Giol. ¡Pobrecitos!: utilidad del ejercicio 709.716,68. Debo hacer una acotación pintoresca. Tengo entendido que hace poco se hizo cargo de la gerencia de estas bodegas y viñedos un almirante de la Nación. No sé si será por lo del agua, por sus antecedentes náuticos. (*Risas*).

Sr. Godoy. — Ese chiste ya lo hizo en el seno de la comisión.

Sr. Corominas Segura. — Es por la gran honorabilidad que lo caracteriza que está al frente de una gran empresa.

Sr. Pena. — Debe al Banco Español 3.679.959,87 pesos.

Sociedad anónima Juan Traverso e Hijos, balance del sexto ejercicio social al 30 de Abril de 1934. Utilidad del ejercicio: 90.424,17.

Bodega de Domingo Tomba. Esta sí que anda mal, si los balances no están mal...

Sr. Biancofiore. — Dos millones de pérdida.

Sr. Pena. — Esto no hace, en realidad, honor al presidente de la Unión Industrial Argentina que firma los balances como vicepresidente en ejercicio.

Sr. Corominas Segura. — El no puede alterar los resultados reales de la explotación comercial.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Sírvase no interrumpir el señor diputado.

Sr. Pena. — Este despacho ya ha tenido en Mendoza un principio de ejecución, porque allí se acaba de dictar una ley que parece ser, en cierto modo, un anticipo de lo que vendrá después porque no puede esperarse que su financiación salga de Mendoza, donde el atraso de buena parte de la administración es de varios meses.

La ley a que me refiero fué combatida rudamente por nuestros represen-

tantes, los senadores Castromán y Palacín.

El primero, al fundar la disidencia socialista expresó: «Todas las medidas legislativas adoptadas de 20 años a esta parte con relación al problema de la industria vitivinícola, no habían tenido otra consecuencia que empeorar a la larga el estado de la cuestión y hacer más difícil su solución». Luego habla de las soluciones propuestas allí, que llegaron a tener el voto de la Cámara de Diputados, y que el Senado aun no consideró.

El senador Palacín abundó en consideraciones contrarias a esa inversión de dinero destinado a elaborar una reserva de 750.000 cascos y destinarla a diversos objetos menos a adquirir la cantidad de 1.300 bordelesas de vino de borra...

El diputado Marianetti, ocupándose ya de esta iniciativa en una publicación reciente, dice lo siguiente:

«Esta es una ley para los capitalistas, cuyo sostenimiento se carga a los trabajadores.

«El Ejecutivo nacional comprará «los sobrantes» de vino para revenderlos a los bodegueros cuando la junta reguladora «decida» revenderlo...

«¿Se quiere algo más burdo? ¡Comprarle a los bodegueros para luego revenderles el mismo producto al mismo precio o a mayor precio!

«Los bodegueros lo que buscan es deshacerse de sus sobrantes y cuando han encontrado quien lo adquiera, — en este caso el Estado provincial o nacional —, ya no querrán saber más nada con ellos. Y aunque se «obligaran» a la readquisición, ¿cómo se puede hacer efectiva si manifiestan o comprueban que no tienen dinero?

«Una de dos: o el precio del vino aumenta o disminuye. Si el precio del vino aumenta, los bodegueros no se desprenderán de él para vendérselo al gobierno. Preferirán especular con él en el mercado.

«Si, por el contrario, el precio disminuye y no hay salida, los bodegueros tendrán interés en «endosárselo» al gobierno, pero no tendrán interés en

recomprarlo. Esto podría ocurrir únicamente en casos de demandas excepcionales por pérdidas de cosechas, etcétera, en cuyo supuesto tampoco habría motivos para que el gobierno entregara vino a los bodegueros para facilitarles grandes ganancias a través de la especulación.»

Ya bajo el gobierno de Mendoza, se votaron el año pasado 3.000.000 para adquirir el producto de más de tres mil hectáreas de viñas, con el propósito de revender dicho producto o elaborarlo. La uva luego quedó en las cepas. Se destruyó así la tercera parte de la producción.

Para este año el programa es el que acabo de enunciar con las cifras que he dado recién.

Sr. Graffigna. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Pena. — Sí, señor diputado, porque me significará un descanso.

Sr. Graffigna. — Si no se hiciera este programa, se destruiría más, mucho más.

Sr. Pena. — Ya vamos a ir a eso.

Sr. Graffigna. — Si no se hubiera formado la Sociedad Vitivinícola, se hubiera destruido mucho más. La Sociedad Vitivinícola no se hizo para destruir.

Sr. Pena. — El señor diputado por Mendoza ha dicho que esta solución es un medio normal que la economía clásica aconseja, lo que equivaldría a decir que es una expresión médica afirmar que a alguien le sale un chichón si le dan un golpe. Es tan clásico lo que se va a hacer, como es clásico lo que yo digo.

Cualquiera entiende al señor diputado cuando entra en la economía clásica: el medio normal que la economía clásica aconseja...

Yo preguntaría: ¿Qué economía clásica aconseja, — si es economía y si es clásica — quemar los cañaverales o echar el vino en la acequia, destruir la uva o dejarla que se pudra? Eso no está en la economía clásica. Eso está en el interés de algunos negociantes, pues es clásica la actitud de algunos capitalistas que arruinan la economía.

Si hay alguna economía teórica que pueda exaltarse a la categoría de clásica está dicho que debe ser una economía de ordenamiento, de regulación, y de principios sanos y justos, y nunca puede esa economía encontrar semejantes soluciones.

Tampoco es exacto lo que el señor diputado pretende, de que será la industria la que vaya a pagar estos 30.000.000. Si el vino admite un recargo de un centavo por litro de impuesto como tasa adicional, la Nación que tiene un presupuesto en déficit, que tiene tantas obligaciones que cumplir y no puede hacerlo por falta de recursos, que sigue descontando con una escala a los sueldos, hasta a los más insignificantes, una suma mensual crecida, y que ha reducido el salario mínimo a una cifra incompatible con las necesidades más perentorias de una buena parte de la población, podría aplicarlo para aumentar sus recursos. ¿Cómo puede decirse que si la industria del vino puede resistir el gravamen de un centavo y puede dar 30.000.000, los va a pagar la industria? Son rentas que podría tener el Estado, y no las tiene; y, por otra parte, ¿quién va a creer que esos 30.000.000 de pesos, si esta ley se vota, van a salir de la industria? Van a salir de los que consumen el vino; es una cosa tan clara como el agua que le ponen al vino. (*Risas*).

Ya dije en la comisión, que la iniciativa del gobierno tiene dos partes. Tiene un mensaje, que ya dije en la comisión, que es bastante bueno; el señor ministro de Agricultura tuvo un movimiento de cabeza en señal de reconocimiento por mi manifestación. Pero agregué que esa primera parte del mensaje venía acompañada de una parte pésima, que es el proyecto de ley.

Y el proyecto de ley es lo que consideramos.

En literatura es fácil que nos pongamos de acuerdo; en general, en los aspectos literarios, cuando no somos especialistas, nos es fácil ponernos de acuerdo: cuando se trata de especialistas, ya la cosa se complica; pero todos apreciamos una exposición vigo-

rosa, objetiva, bien presentada, con propósitos enunciados en esa buena literatura que leemos con interés. Pero el mensaje es una cosa, y lo que se propone es muy otra. El señor diputado, informando el despacho de la mayoría, dijo que se habían ocupado de concretar lo más posible; yo diría que se dió la tarea de concretar lo imposible y antes de declararse vencido, ha dicho que se ha concretado lo más posible, pero en realidad lo que se quiso concretar es lo imposible.

Se trata de destinar 30.000.000. Quince son para indemnizar a aquellos que cambian el cultivo de la vid por otros cultivos. En la comisión dijo el señor diputado Padrós: «¿por qué no ponemos directamente que se destinará ese dinero a la extirpación de la vid?» Yo dije que era un tanto quirúrgico eso. Pero en la lectura del informe del señor Liaudat encuentro que la idea está expresada en esos mismos términos, a cierta altura del desarrollo adonde no había llegado cuando oí la expresión al señor diputado Padrós. Los otros 15.000.000 se destinarán a comprar el vino que tienen los bodegueros, para tenerlo y después volver a venderlo a los bodegueros cuando ellos lo quieran comprar.

El señor diputado hace un gesto negativo, pero aquí, el despacho dice lo siguiente: «para adquirir los excedentes de vino de los bodegueros que se obliguen a recomprarlo cuando la junta decidiese venderlo, en la forma que considere más conveniente». Si no dice lo que yo he interpretado, desearía que se hiciera otra interpretación, ya que habría que concluir que no tienen las palabras sentido literal.

Sr. Vicchi. — Voy a demostrarle, si me permite, que hay una evidente contradicción entre el documento que hace un rato leía y que dice que los bodegueros no comprarían el vino sino cuando el vino subiera, y el texto de la ley que hace obligatorio el recompre.

Sr. Pena. — Yo doy por contestada la observación con la respuesta que ha dado a ese interrogante el propio diputado Marinelli.

Sr. Vicchi. — Estamos discutiendo una ley que sancionamos aquí y no lo que pasó allí.

Sr. Arrieta. — ¿Si me permite el señor diputado, para aclarar?

Sr. Pena. — Sí, señor diputado.

Sr. Arrieta. — Voy a aclararle el por qué insinuaba con un movimiento negativo de cabeza mi disconformidad con sus palabras.

El dinero que va a invertir el gobierno nacional en comprar vino, lo va a recobrar luego al revenderlo. Quince millones de los 30.000.000 que por esta ley se votan, no van a tener ese destino definitivo. El destino primordial del dinero está en la compra de uva para dejarla en la planta o para dedicarla a otro objeto distinto a la elaboración del vino. El resto se dedicará a la extirpación de viñedos.

Sr. Pena. — El 50. % se destina a esa operación característica, comprar el vino, vino que no se puede vender, y yo no sé — porque esa información no he podido de ninguna manera corroborarla, pero hay alguna persona que con insistencia me habla y me lo sugiere —. Yo no sé si parte de ese vino no está ya tomando algún sabor que se parece un tanto al del vino de cierto tiempo, cuando no está en buenas condiciones de elaboración. No sé si es muy exacta la afirmación, pero la doy a la Cámara en términos prudentes.

Sr. Vicchi. — Con la misma responsabilidad con que da los otros datos estadísticos, que vamos a analizar.

Sr. Pena. — Voy a borrar las interrupciones, que no consiento y que tienden a menoscabar inútilmente el valor de una exposición que estoy haciendo con absoluta objetividad y sin propósito de molestar a nadie, y no permitiré a mi vez que se me moleste. Borraré, pues, por impertinentes, las observaciones que a mi juicio estén fuera de tono y de razón.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — La Presidencia invita al señor diputado a no aceptar interrupciones.

Sr. Pena. — No las he aceptado.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Aca-
ba de aceptarlas el señor diputado.

Sr. Pena. — Mi propósito, señor presidente, hubiera sido hacer una exposición en otras condiciones, previo un ordenamiento con mayor tiempo de mis papeles; pero, repito, las cosas suceden aquí de la manera más imprevisible, y yo creyendo hablar mañana sobre el vino y dedicar la mañana para ordenar mi exposición, debo hacerlo ahora ante el amago de un cuarto intermedio y ante una Cámara evidentemente fatigada por las largas horas de sesiones que ha tenido durante estos últimos días que venimos tratando asuntos distintos, que terminan por cansarnos.

Para terminar, quiero hacer otras reflexiones. No hay en este país todavía ninguna solución respecto de la leche. Cómo se produce la leche en el país, es asunto sobre el cual se ha hablado y escrito mucho y sobre el que la legislación no ha hecho hasta ahora ningún progreso. La leche es un producto alimenticio de primera importancia; de su calidad depende en buena parte la morbilidad y la mortalidad infantil, y el estado de salud de los adultos. No obstante tratarse de un producto tan noble, no ha habido hasta ahora más que pequeñas iniciativas destinadas a encontrar solución a las condiciones primitivas en que se realiza en buena parte la producción y el expendio de tan importante artículo. Lo último que se ha hecho por el gobierno nacional, es la creación de una Junta Reguladora para elevar el precio del producto, la cual ha llevado las cosas a un grado tal, que los productores han debido hacer graves denuncias públicas acerca de las medidas que se han tomado y que han tenido por consecuencia arruinar aún más la situación afligente en que se encuentran estos productores del campo argentino.

Se han repetido hasta el cansancio algunas palabras de Pasteur acerca de que el vino es un alimento, y la más sana e higiénica de las bebidas. Es evidente que hay médicos que aconsejan vino a los convalecientes, pero hay algunas diferencias entre los vinos, y lo que se aconseja es el buen vino; el de

Mendoza es un vino, a juicio de los que lo toman, bastante malo y así lo dicen hombres, publicaciones autorizadas de hombres competentes, pues se hace el vino en gran escala mediante la química industrial con fines de aumentar en forma desmesurada la producción y obtener ganancias fáciles con el uso de drogas y de agua, se reducen así las perspectivas del desarrollo de una industria e induciendo a los consumidores a que se alejen cada vez más del vino, porque cuanto peor es su gusto y peor su calidad, es evidente que el consumo se reduce, porque la bebida no resulta agradable.

Pongamos término a esta preocupación legislativa por una bebida que será todo lo popular que se quiera, pero que no puede reclamar del gobierno una ayuda de 30.000.000 de pesos en momentos en que hacen falta estos recursos para problemas más urgentes e importantes y cuando hay productores argentinos que tienen indiscutiblemente más derecho a reclamar esa ayuda.

Se trata de una iniciativa que repite una vez más todo el procedimiento clásico — esto sí que es clásico — capitalista de mantener los precios de un producto mediante arbitrios de monopolios y que cuando no lo ha podido hacer a satisfacción ha llegado a la destrucción bárbara de cantidades enormes de riqueza, fruto del trabajo humano, restando a la población una buena parte de elementos que podrían haberse distribuido en el conjunto del país a un precio menor.

Dejemos operar la ley de unificación de impuestos internos votada.

Si las condiciones generales del país acusan una ligera reacción, y si los numerosos industriales poco escrupulosos de Mendoza se reducen, y quedan pocos industriales sin escrúpulos y se mejora así la calidad de la producción, esta nueva crisis de la industria vitivinícola se resolverá satisfactoriamente. No echemos sobre las arcas del Estado un peso cuantioso como el que representan esos 30.000.000 en momentos en que se clama por el déficit del

presupuesto y se quiere crear, sustituyendo un pésimo impuesto como el de las transacciones, por un nuevo y más oneroso impuesto llamado sobre las ventas, que agravará el comercio, el consumo y la economía argentinas.

Con estas palabras dejó fundada nuestra oposición al proyecto, entendiendo que es una repetición de las viejas y malas prácticas que no van a solucionar este problema, sino que lo van a agravar y complicar, y que, en definitiva, persigue única y exclusivamente apuntalar la situación de algunos grandes industriales que han obtenido millones de pesos en la especulación de este comercio de vinos, que se han enriquecido con la explotación de los trabajadores de aquellas provincias ~~que~~ pasan ahora por un mal rato, aunque no tan malo como lo pasa buena parte del pueblo argentino, sin trabajo, sin recursos y sin que el Estado se ocupe de él en ningún momento para aliviar su situación.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Simón Padrós. — Se la cedo al señor diputado por Mendoza, si es que va hacer la réplica.

Sr. Godoy. — Desearía hacer una brevísima rectificación a algunas de las manifestaciones hechas por el señor diputado por la Capital.

Sr. Simón Padrós. — Se la cedo también al señor diputado.

Sr. Godoy. — Muchas gracias.

Quiero referirme a la referencia intencionada de algunas cifras del informe de la Comisión Nacional de la Industria Vitivinícola, con respecto al agumiento del vino.

En primer lugar, quiero recalcar, como ya se dijo antes, que ese no es un informe oficial, que es el informe de algunos miembros de una comisión que quedó prácticamente disuelta y que firmaron o no firmaron — porque algunos dicen que se ha usado su nombre sin autorización — una especie de informe que ha permanecido oculto,

desconocido, hasta hace pocos días en que por sorpresa se lo dió a publicidad.

Sr. Pena. — Pido que se reproduzca en el Diario de Sesiones el facsímil de esta publicación, si no se reconoce que es del ministerio.

Sr. Vicchi. — Es exacto; es del ministerio.

Sr. Godoy. — Sí, es del Ministerio de Agricultura, pero queremos dar datos complementarios que sirvan para apreciar su alcance.

El mejor argumento para señalar el escaso valor que tiene, está en las cifras de agumiento total que asigna al vino producido por Mendoza y de San Juan, partiendo de la base de que tanto en una como en otra provincia se agrega 11 ½ litros de agua por hectolitro de mosto, lo que es materialmente imposible que ocurra, porque es presumible que habrá, por lo menos, algún industrial honesto aunque admitiéramos la afirmación del señor diputado por la Capital de que son muy numerosos los industriales poco escrupulosos...

Sr. Pena. — Lo dice la publicación a que me he referido: numerosos industriales no escrupulosos. No me ponga a mí frente a los industriales.

Sr. Godoy. — Me alegro de que sea impersonal esa afirmación, que sea por cuenta de un tercero.

Sr. Pena. — Es un informe oficial.

Sr. Godoy. — Que aparece como oficial pero que, en realidad, no tiene ese valor.

Sr. Pena. — Eso dirá el señor ministro de Agricultura.

Sr. Vicchi. — ¡Pero no interrumpa!

Sr. Pena. — Es grave que se estén haciendo en la Cámara afirmaciones de esa naturaleza, a propósito de un informe publicado por el Ministerio de Agricultura. Por ello, entiendo que debe estar presente, por lo menos, el ministro de Agricultura, para tratar este asunto y hago indicación en ese sentido.

Sr. Godoy. — Pido al señor presidente que me haga respetar en el uso de la palabra. Ya que el señor diputa-

do fué tan poco complaciente con las interrupciones, yo tampoco deseo ser interrumpido por él. Pido que me deje hilvanar siquiera una frase.

Sr. Pena. — No lo interrumpiré más.

Sr. Godoy. — Por otra parte, no le permitiré que me interrumpa y haré testar todas sus interrupciones.

Decía que estas cifras tienen en sí mismas la prueba de su total inexactitud, porque no es posible elaborar cálculos con esa base de que la totalidad de la producción de San Juan y de Mendoza sea sometida al proceso de aguamiendo en bodegas, en la medida del extremo límite que pudieran admitir los mostos para ser rebajados en su graduación alcohólica. Esa es la cifra de este pseudo informe, que no tiene valor alguno.

Se ha dicho que en la Argentina la extensión de los cultivos de vid alcanzan cifras extraordinarias. Dije para rectificar eso, que la Argentina ocupa el séptimo lugar entre las naciones del mundo en cuanto a la cantidad de viñas y producción de vino. Están antes que la Argentina: Argelia, España, Francia, Italia, Portugal y Rumania, según cifras dadas por el Boletín Internacional del Vino, órgano oficial del instituto que actúa en París.

El porcentaje de viña es también interesante conocerlo. En Europa está plantado con viñas el 0,6 % del territorio; en América del Norte y Central, el 0,03 %; en América del Sur, el 0,01 %; en Asia, el 0,001 %; en Africa, el 0,008; y en Oceanía, 0,006. Resulta así que Europa es el continente en que existe una mayor proporción de plantaciones de vid.

Quiero referirme brevemente a la crítica que se ha hecho respecto al argumento que esbocé sobre que las medidas que se aconsejan para solucionar el problema vitivinícola tienden a reforzar las indicaciones de la economía clásica. Y para no hacer sólo una afirmación de carácter doctrinario, quiero referirme a un hecho positivo: en Italia y especialmente en Francia y en España, en cuyos gobier-

nos han primado partidos de izquierda, celosos cultores de las doctrinas de la economía clásica, se han adoptado en 1931, 1933 y 1934 medidas casi idénticas a las que estamos tratando: la extirpación de viñedos, la prohibición de nuevas plantaciones, la reducción de los stocks y su compra por el gobierno, la limitación de la producción, obligando, como la ley francesa de 1931, a que los productores no elaboren más de los dos tercios de su capacidad productiva, o como en España en que se ha prohibido plantar nuevas viñas y se ha establecido una limitación en la producción. Esto bajo el gobierno de Azaña, que no puede ser tildado de derechista.

Dejo así levantadas las observaciones que me interesaba rectificar.

Sr. Vicchi. — Pido la palabra.

Lamento tener que hacer una exposición — que trataré sea lo más breve posible — a una hora tan avanzada y en el estado físico precario en que me encuentro.

El problema que trata de solucionar el proyecto que la Cámara considera en este momento, podría motivar por parte de los diputados que representamos a la provincia de Mendoza una apasionada intervención; apasionada, no porque el problema sea pequeño, minúsculo, como se ha querido presentarlo, simplemente circunscripto a la posición de unos pocos industriales que explotan esta actividad económica, sino porque en realidad es un problema que afecta a dos provincias argentinas en la totalidad de su población, pues no es posible prescindir de la interdependencia que existe entre las distintas capas sociales.

No voy a seguir al señor diputado por la Capital en ese devaneo desordenado, incoherente a ratos y siempre superficial, que constituye su extensa exposición de esta tarde. Me explico el esfuerzo que él ha hecho para improvisar sobre un tema tan complejo como éste, y tengo el propósito de ser lo más impersonal posible, para dar al debate toda la serenidad que requiere

la consideración de un agudo problema nacional por el Congreso argentino.

En primer lugar, ha habido la inevitable referencia al problema del alcoholismo, planteado tantas veces y siempre con absoluta falta de información, planteado con el viejo prejuicio prohibicionista, para el cual los estudios, las estadísticas y la experiencia de países de gran cultura, nada significan y para nada sirven.

No voy a destruir con palabras sino con cifras esas afirmaciones, antojadizas y arbitrarias.

Afirmo que el consumo del vino es tan antiguo como la humanidad y añado esto otro que parecerá raro y sorprendente: en los países de consumo vinícola es donde se notan los índices más bajos de alcoholismo. Voy a dar datos que saco de una interesantísima exposición de uno de los técnicos más autorizados del país en la materia, del ingeniero Carlos M. Zavalla, quien a su vez los ha extraído de publicaciones oficiales de países extranjeros que se mencionan en el folleto que tengo al alcance de mi mano.

En el Norte de Alemania, el consumo de alcohol por habitante, es de 8,25. y en Dinamarca, también de 8,25. En cambio, es mucho menor ese índice en los países vitícolas: Portugal, 2,10; España, 2; Italia, 1.

Y como la comparación de estadísticas de diferentes países puede parecer poco convincente a algunos espíritus incrédulos, trae a continuación datos que ha podido recoger en una nación eminentemente vitícola, en Francia. De esos datos resulta lo siguiente: consumo de alcohol por habitante en departamentos no vitícolas, 11,86 litros. En departamentos vitícolas: Gironda, 1 litro por habitante; Lot et Garonne, 0,19; Gers, 0,60.

Pero no bastan esas informaciones. Como siempre se puede ir al socorrido argumento de que la prohibición toda de bebidas alcohólicas eliminaría graves perturbaciones sociales, enfoquemos el caso concreto de Estados Unidos, donde la prohibición ha sido experimentada. Enfermos de alcohol en los

hospitales: en 1920 — fecha en que empezó a regir la ley seca — 6 %; en 1928, 18 %. Muertos por alcoholismo; 1920, 1,7 %; 1928, 13,6 por ciento.

Detenidos por ebriedad: Año 1920, 279.000; 1927, 668.000.

Despachos de bebidas que en 1920 pagaban patente e impuestos y eran controlados por el Estado: 6.000; en 1930, despachos ilícitos, que no pagaban impuestos ni patente y escapaban al control del Estado, 32.000.

Empleados para controlar la aplicación de la ley: 1920, 943; 1930, 2.278.

Guardacostas: 1920, ninguno; 1930, 12.100.

Presupuesto: 1920, 3.100.000 dólares; 1930, 14.986.000.

Alcohol secuestrado: 1920, 153.735 galones; 1930, 32.474.234.

A las palabras vagas de los técnicos del prohibicionismo, contesto con la dura experiencia de una nación que lo ha ensayado. Es oportuno completar las conclusiones de la estadística con algunos juicios de personalidades de Estados Unidos.

En 1930, el diputado James Beck, del Estado de Pensilvania, pronunció un discurso sobre la legislación de entonces y expresó: «Se nos ha dicho que con la prohibición las cárceles quedarían vacías y acabamos de votar varios millones para la construcción de prisiones federales para encarcelar a los miles de sujetos que sin la prohibición hubieran sido ciudadanos útiles.»

En la misma época, el doctor Rawing, director del departamento de sanidad de Illinois, declaraba a la prensa: «El alcohol ha muerto más gente en Illinois el año pasado que la fiebre tifoidea, la escarlatina, la difteria, el sarampión y la parálisis infantil juntas. Los decesos por alcoholismo y cirrosis del hígado han aumentado de 1919 a 1930 en 56 por ciento.»

¿Cuál fué el resultado de esta experiencia? Estados Unidos debió abolir la enmienda constitucional y uno a uno sus Estados van eliminando la prohibición dentro de sus disposiciones legales, por los desastrosos resultados que ella produjo.

Tengo aquí una circular del ministro de Instrucción Pública de Francia en la que se dan una serie de antecedentes interesantes e instrucciones a los maestros de escuela para que enseñen a los niños el consumo de vino, bebida alcohólica de baja graduación, cuyos efectos no son perturbadores si se la usa con moderación y que evita que se consuman bebidas de alta graduación alcohólica o de elaboración artificial, que producen efectos perniciosos en el organismo humano.

Dejo, pues, contestada en forma concreta esa referencia vaga y un tanto enconada, diremos, con respecto a la industria vitivinícola, a la que se la quiere hacer aparecer como un factor de alcoholización de la población argentina.

Y paso a otro aspecto: las estadísticas.

El señor diputado por la Capital ha hablado con desaprensión realmente admirable sobre las estadísticas en materia vitivinícola. Para ello nos ha leído en forma trunca un párrafo del excelente informe del doctor Héctor Liaudat, uno de los trabajos más completos que se hayan hecho sobre la materia, donde critica estadísticas del Ministerio de Agricultura de la Nación en cuanto a las plantaciones de viñedos existentes en el país.

Quiero empezar por preguntar desde cuándo constituye una sorpresa constatar que en el país existen pésimas estadísticas. ¿No estamos presenciando recién el nacimiento de esta nueva preocupación por parte de los poderes públicos de compilar datos, de reunir antecedentes necesarios a fin de estudiar las diversas actividades económicas que desarrollan su acción útil en la Nación?

Pero si esa imputación se puede hacer en forma general, no es justo ni es exacto referirla a ciertas provincias como Mendoza, que en materia vitivinícola tiene una estadística completa, ordenada y las publicaciones se realizan con toda la seriedad que el asunto requiere.

¿Cómo voy a tomar, entonces, muy en serio las observaciones que sobre la estadística ha hecho el señor diputado por la Capital? Nos pregunta, con una ingenuidad extraordinaria, si hay publicaciones nuevas después de decirnos que conoce el anuario que se publicó el año 1926, desconociendo todo lo aparecido desde entonces en adelante, que es realmente cuando se ha producido el estudio a fondo de la industria vitivinícola!

Sr. Pena. — ¡Qué casualidad!

Sr. Vicchi. — Después siguen las afirmaciones dichas en el mismo tono despreocupado, sin apercibirse que los legisladores de la Nación tienen el deber de contemplar problemas de la magnitud de éste, con reflexión y estudiarlos con antecedentes perfectamente analizados, seleccionados y que merezcan fe para poder formar juicio al respecto.

Sr. Pena. — Son datos oficiales.

Sr. Vicchi. — Ya me voy a referir a esos datos.

El señor diputado usa la táctica muy conocida de leer papelitos que se recogen de un lado y de otro sin mayor control para hacer en forma indirecta afirmaciones que pueden resultar imprudentes y contradictorias. Si se hubiera detenido un momento en analizar los distintos documentos que ha traído al debate, se hubiera apercibido de las respuestas que merecen sus afirmaciones.

El señor diputado ha dicho que en 1932 — y ha leído una información de por ahí — que los industriales poco escrupulosos de Mendoza, no obstante la fuerte helada, han elaborado vino en cantidades extraordinarias.

Yo no vengo, señor presidente, a hacer aquí la defensa de los industriales de Mendoza. Creo, sí, que todos los legisladores debemos ser medidos cuando consideramos a cualquier gremio que desarrolla una actividad legítima en el país. Pero he afirmado que si los industriales de Mendoza, a quienes no creo ni mejores ni peores que los de la generalidad de las provincias argen-

tinias y diría de los otros países del mundo, si los industriales están contenidos por una legislación previsora y por la fiscalización que tiene la obligación de hacer el Estado, se suprimen los abusos y es así cómo se eliminan los factores de perturbación dentro de la economía nacional.

Con respecto a esa información concreta que nos ha traído el señor diputado en ese folletito, voy a leer algunas cifras que son más elocuentes que cualquier comentario.

Sr. Pena. — Se dice en esa publicación, no lo digo yo.

Sr. Vicchi. — El señor diputado entra a hacer imputaciones sin haber verificado por lo menos la exactitud de la información, y eso es lo que no debe hacer.

Sr. Pena. — Señor diputado...

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Invito al señor diputado por la Capital a que no interrumpa al orador.

Sr. Vicchi. — Efectivamente, señor presidente. No deseo ser interrumpido.

Sr. Pena. — Es que no quiero aparecer como dando informaciones parciales. Son datos suministrados por el Ministerio de Agricultura.

Sr. Vicchi. — Yo quiero puntualizar bien el alcance de esas informaciones.

Sr. Pena. — El señor diputado dará sus datos; yo doy los que tengo.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Sírvase no interrumpir, el señor diputado.

Sr. Vicchi. — Según datos recogidos en la Dirección de Estadística de la provincia de Mendoza, controlados por los que publicó la Dirección de Industrias de Mendoza, es decir, dos fuentes distintas, que se publican en el informe del doctor Liaudat, a que he hecho referencia, en el año 1932 se elaboraron en Mendoza 368.300 hectolitros, al lado de la producción de 1931, que es de 4.025.540 y de la de 1933, que es de 5.826.700.

San Juan, que sólo produce un veinte y tantos por ciento de la producción nacional — ya que todo el mundo sabe que a Mendoza le corresponde el 70 %, cantidad variable según diversos fac-

tores — produce en el año que Mendoza produjo 368.300 hectolitros, 1.374.620 y Río Negro, 194.180.

¿Después de esto se puede afirmar que en el año 1932 se ha elaborado en Mendoza en grandes proporciones?

Y vamos ahora al estiramiento, a esas cifras astronómicas que nos ha citado el señor diputado, para demostrarnos que no hay superproducción. ¡Ahora nos despertamos con este panorama halagador: no existe superproducción en el país; todo esto que estamos discutiendo, toda esta tortura inmensa que pesa sobre grandes masas de la población argentina, no es sino la consecuencia de maniobras industriales que se pueden evitar fácilmente! Ha analizado el señor diputado Godoy el alcance de esas cifras, y las ha rectificado concluyentemente, pero yo quiero anotar estas otras comprobaciones.

El señor diputado afirma que la superproducción se ha producido por un gran aguamiento. Las cifras que da — aceptámoslas en un arranque de indulgencia — alcanzan a 687.000 hectolitros. Y en el informe de Liaudat vemos que, respecto al consumo actual, el desequilibrio de la producción por año se calcula en 3.800.000 hectolitros y que, con respecto a lo que se llama una producción normal — es decir no consumiendo 44 litros por habitante como se consume ahora, sino consumiendo 58 litros — alcanza a 1.300.000 hectolitros. Hay, pues, alguna diferencia, además del estiramiento a que se ha referido el señor diputado.

Hay otra cosa aun más graciosa. El señor diputado nos leyó unos párrafos de un enólogo, que según él, es hombre de gran autoridad, para decirnos que el problema de Mendoza está en los vinos de alta graduación alcohólica, que se obtiene provocando una madurez excesiva, a fin de que sean estirados en el mercado de consumo. Pero, ¿en qué quedamos? ¿En Mendoza se produce vino de alta graduación y fuerte color, lo que significa una gran madurez y excluye el agregado de agua que bajaría la graduación, o en Mendoza

se agua y se vende vino de baja graduación?

¡Los gravámenes de Mendoza y San Juan! ¡La ley de unificación! Seguiré refutando estas afirmaciones del señor diputado, y después me ocuparé del proyecto de ley. El abuso impositivo que se pretende señalar en las provincias cuyanas habría sido curado por la ley de unificación que sancionamos hoy. Y si los gobiernos de Mendoza y San Juan o sus representantes siguieran en una política fiscalista regional gravando en gran proporción el consumo nacional, la ley de unificación habría tenido en nosotros decididos adversarios. Pero hemos sido partidarios resueltos de la unificación, puede decirlo el señor ministro de Hacienda, que nos ha visto llegar a su despacho muchas veces, estimulándolo para que esa medida legislativa se sancionara cuanto antes, porque la considerábamos una gran medida para salvar la industria y evitar los errores que se cometieron en las provincias productoras y los que cometieron en mayor escala aún las provincias consumidoras.

Los efectos de la unificación, dice después, colocan a Mendoza en situación de privilegio, lo que es inexacto. Y a este respecto quiero destacar que el señor diputado se especializa con Mendoza como si el panorama vitivinícola terminara en esa provincia. Es inexacto que se le creen privilegios. La ley de unificación barre con privilegios que se habían creado, por una serie de factores en contra de Mendoza y en favor de las demás zonas del país.

Yo he oído decir a la representación socialista en muchas oportunidades y me ha parecido el juicio de un gran acierto y de una gran verdad: el desarrollo de las industrias artificiales es un grave error económico. Hay que tratar de que las industrias se desarrollen en las zonas más aptas, y en materia vitivinícola es evidente que Mendoza es la zona más apta. Lo están demostrando los costos de su producción, a los que voy a referirme rápidamente. Dichos costos son: Mendoza 6,49, San Juan 8,24, Río Negro 8,40.

Lo que ocurría es que Mendoza estaba trabada por una serie de factores, el del transporte en primer término, que daba lugar a esta curiosísima situación, no obstante la irónica afirmación del señor diputado Ghioldi a quien, a pesar de sus brillantes condiciones parlamentarias que le reconozco sin reatos, le recuerdo que la dialéctica por sí sola no convence.

Sr. Ghioldi. — Sería como un salto mortal en el vacío.

Sr. Vicchi. — El Ferrocarril Pacífico, que es el único que vincula a Mendoza con sus mercados consumidores tiene, como lo dijo ayer el señor diputado Godoy, una tarifa diferencial que es realmente irritante.

Sr. Ghioldi. — En eso estamos conformes.

Sr. Vicchi. — Muy bien. San Juan, con 144 kilómetros más, paga menos que la provincia de Mendoza.

Sr. Ghioldi. — Por eso la conveniencia del ferrocarril a Pie de Palo.

Sr. Vicchi. — Es exacto.

Sr. Biancofiore. — Y de Rosario a Mendoza.

Sr. Vicchi. — Voy a dar el dato de lo que cuesta en la Capital Federal el transporte desde las distintas procedencias: de Mendoza, pesos 49,05; de San Juan, 42,61; de Río Negro, 43,08 pesos moneda nacional por tonelada. Como se ve, es apreciable la diferencia de flete. A todo esto se agrega la diferencia impositiva. Mendoza no elimina los fletes ferroviarios; sigue padeciendo la injusticia de estas tarifas, que es lo que nos hace clamar por la construcción del ferrocarril a Pie de Palo, afortunadamente hoy en marcha. Y, desde luego, que a pesar de su mayor costo en los mercados de consumo, la indudable mejor calidad de sus productos, es decir, del vino tinto o sea el más consumido, señor diputado Graffigna, Mendoza, a más alto precio que las otras zonas, puede competir con ellas. Pero si es la zona más apta, que no se la coloque en una situación de desigualdad, que no se la persiga!

Los hombres de Mendoza tenemos una amplia visión del panorama nacional, sentimos nuestra solidaridad

nacional, y así después de adoptada la unificación de impuestos pensamos que esta ley que ahora sanciona el Congreso será más necesaria para las otras zonas que para Mendoza misma, que indudablemente con aquella ley encontrará un gran alivio para el desarrollo de su comercio. Pero no queremos hacer guerra de destrucción a las demás zonas y deseamos, por el contrario, que el gobierno tome las medidas para que el equilibrio se mantenga y para que lo que haya que corregirse se corrija paulatinamente, sin precipitar a la bancarrota las industrias de las otras zonas.

Se ha dicho, también, que en Mendoza existe el latifundio. Lamento no tener aquí los últimos datos estadísticos; pero afirmo, sin temor de ser rebatido, que si hay provincia donde la subdivisión de la tierra es un hecho real, esa es la provincia de Mendoza, y para demostrarlo me bastará referirme a los mismos datos citados por el señor diputado Pena. Aun admitiendo la conclusión a que llega, que no es exacta, resultaría que un 60 % de los propietarios tienen alrededor de 50 hectáreas. ¡Qué formidables latifundios esos de Mendoza! Yo creía que los latifundios eran enormes extensiones de tierra, pero ahora me entero que también pueden ser de 50 hectáreas. Si se agrega ahora que la mayor proporción de los propietarios tienen mucho menos — lo que verificaremos en oportunidad, porque no tengo los documentos a mano — se percibirá que en Mendoza la subdivisión de la propiedad es un hecho.

Sr. Graffigna. — Según las estadísticas de San Juan, por cada 100 hectáreas de viñas, hay 9 propietarios.

Sr. Buira. — Quiere decir que la afirmación del señor diputado Pena no es tan errónea, ya que el señor diputado Graffigna expresa que en cada 100 hectáreas de viñedo hay 9 propietarios; quiere decir, que cuando se habla de latifundios, se hace referencia a la explotación a que está destinada más que a la extensión. No puede ser latifundio, por ejemplo, en Santa Cruz, una extensión de 20.000 hectáreas dedicadas a la cría de ganado lanar;

pero en cambio, sería un enorme latifundio en la provincia de Buenos Aires.

Sr. Bruchou. — Hay hombres de ese sector que se referían y hablaban de latifundios en el Chaco, donde la explotación requiere tener muchas hectáreas para poder desenvolverse. Hay un contrasentido en esa afirmación.

Sr. Buira. — Según sea la zona del Chaco.

Sr. Vicchi. — Afirmo que en la provincia de Mendoza es un hecho la subdivisión de la tierra, dato que podrá ratificar cualquier miembro de ese sector que conozca la provincia de Mendoza.

Sr. Basualdo. — El señor diputado Dickmann la conoce.

Sr. Buira. — Una extensión de 50 hectáreas no es tan chica para la vid.

Sr. Bruchou. — Pero no es un latifundio.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Para matizar ya bastan las interrupciones.

Sr. Vicchi. — Una propiedad de 50 hectáreas destinada a cualquier cultivo no se llama latifundio en ninguna parte del mundo.

Se ha referido también el señor diputado Pena al estiramiento de los productos con una supuesta actividad exclusivamente química en la elaboración del vino. Quiero hacer notar que si hay una legislación fuertemente restrictiva en materia de control es la de mi provincia; es tan restrictiva que se dice que es un serio obstáculo para la producción. No obstante eso se la ha mantenido en Mendoza con firmeza, porque nos interesa acreditar el producto de nuestra industria como un producto totalmente genuino y no de manipuleo. En ese sentido deseo dar algunos datos.

En Mendoza existe una ley que prohíbe la introducción de ácidos minerales, del ácido sulfúrico y de todos esos otros que se han citado en la lectura que ha hecho el señor diputado Pena. Para poder introducir ácido sulfúrico en Mendoza destinado a otras actividades industriales, como por ejemplo para preparar el agua acidulada para las baterías de los motores,

etcétera, es necesario estar inscripto en la dirección de industrias como introductor y se le miden exactamente las cantidades que se reciben y cuál es el lugar a donde se trasladan. Si aparecen notas en los diarios de cuando en cuando, de que se ha descubierto alguna partida, ello se debe precisamente al enorme control que hay.

En segundo lugar voy a dar este otro dato sorprendente: en este momento costaría más adulterar el vino que producirlo genuinamente.

Tengo aquí un informe de Impuestos Internos nacionales, cuya actuación, dicho sea de paso, no se la puede señalar como de benevolencia y tolerancia hacia la industria mendocina. Es notorio el fuerte movimiento de protesta que existe en aquella provincia contra los procedimientos de la Administración de Impuestos Internos, pero por el momento sólo deseo decir que en ese informe de Impuestos Internos se dice que los resultados de esta fiscalización son apreciables.

La citada memoria de la Administración de Impuestos Internos establece que por primera vez en la República Argentina, durante el año 1932 se controló la elaboración de los vinos de Cuyo, inspeccionándose durante la tarea de la vendimia 1.600 bodegas de Mendoza y 565 de San Juan, y que cumpliendo esas tareas se intervinieron 1.372 hectolitros de vino sobre una producción de más de 5.000.000 de hectolitros, 26.842 litros de arrope y 7.000 litros de borras.

Como se ve, estos datos de la Oficina Nacional de Impuestos Internos certifican que la elaboración se ha realizado en esas zonas en condiciones de absoluta seriedad y fiscalización, debiendo tenerse presente que era la primera vez que Impuestos Internos la realizaba en una forma eficaz. Esa fiscalización ha estado siempre a cargo de las autoridades provinciales, que la han hecho sobre todo en los últimos tiempos, con una severidad que deseábamos para los mercados de consumo, que es lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, cuando pedimos la sanción de

la ley de vinos, donde todas las medidas no tienden sino a resolver el problema del control del comercio de vinos y también cuando nos oponemos a que la uva se elabore fuera de la zona de producción, donde no se prohíbe la introducción de ácidos minerales, donde el cuerpo de inspectores es ínfimo comparado a la tarea de investigación que deben realizar.

Por otra parte, la legislación de la provincia de Mendoza — me lo recuerda mi compañero de representación Corominas Segura — dispone con cuánta cantidad de uva se ha de elaborar un litro de vino y al que use menos cantidad se le aplican fuertes multas. Está prevista, pues, la forma de una elaboración absolutamente genuina. De manera que ese mito interesado y ligero de la gran falsificación queda reducido a una simple pompa de jabón.

En cuanto a los balances de las sociedades ocurría una cosa graciosa cuando los analizaba el señor diputado por la Capital: cuando los balances arrojaban utilidades el señor diputado se molestaba y cuando arrojaban fuertes pérdidas también se molestaba. El señor diputado se preguntaba: ¿cómo se habla de la crisis de la industria vitivinícola si esos balances acusan buenas utilidades?

Yo declaro que los dueños de establecimientos que en esta época obtienen utilidades son sencillamente unos bienaventurados. Tengo aquí un cuadro estadístico que está en el informe del señor Liaudat, en que se consignan las cifras relativas a una serie de sociedades. En él se consignan datos globales de una serie de sociedades. Esas sociedades tenían en 1933 un capital en giro de 61.083.000 pesos. Las pérdidas registradas en el ejercicio de 1933 por esas sociedades ascienden a 2.106.000 pesos, y, eso que estos datos son anteriores a la fuerte caída de los precios y que se han tomado los datos al 31 de Diciembre, cuando los ejercicios terminan el 30 de Junio. La baja catastrófica de los precios se produjo después de estos cálculos. Si se computa esa baja puede suponerse cómo debe ser

de floreciente la situación de los establecimientos industriales, cuando se conoce el caso de algunos, cuyas acciones no tienen ningún valor en el mercado.

Sr. Corominas Segura. — Si me permite...

La Revista de Investigaciones Económicas del Banco de la Nación publica un estudio sobre la industria vitivinícola en Agosto-Septiembre de 1933. Después de anotar las alternativas de una cantidad de industrias destaca especialmente que la industria vitivinícola ha producido una pérdida del 10 % anual.

Sr. Vicchi. — Voy a solicitar que este cuadro se inserte en el Diario de Sesiones.

—Asentimiento. (1)

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Como hay asentimiento, así se hará.

Sr. Vicchi. — Hay algo más. Nadie ignora que durante este año el vino se ha estado pagando en la provincia de Mendoza a 3 y 3 ½ centavos, no obstante que su costo de producción es de más de 6 centavos, lo que produce fuertes pérdidas y acentúa el proceso de decapitalización violenta que he señalado. Si después de esto, se insiste en afirmar que las pérdidas de los industriales de Mendoza son simplemente un fantasma que se quiere presentar para impresionar a los legisladores de la Nación, yo declaro que no puedo tomar en serio las afirmaciones que en tal sentido se hacen.

Entremos ahora a considerar el proyecto. ¿Cuáles son las grandes medidas del proyecto? El Poder Ejecutivo ha podido constatar, en virtud de los estudios a que he hecho referencia — formulados por técnicos que no tienen vinculación alguna con esta industria, por técnicos que si alguna vez han estado en Mendoza ha sido de tránsito, de manera que las informaciones que nos dan, hechas a base de una compilación de estadísticas serias, no pue-

den ser sospechadas —, el Poder Ejecutivo ha podido constatar el fuerte desequilibrio entre la producción y el consumo, que señalaré en algunas pocas cifras.

La capacidad de producción corriente del país se calcula en estos estudios en 8.300.000 hectolitros por año. De acuerdo con el consumo actual, calculado en 5.000.000 y fracción, el desequilibrio sería de 3.300.000 hectolitros. Y con el consumo normal, es decir, con un consumo de 58 litros per cápita — actualmente es de 44, como digo — con ese consumo normal según los cálculos del doctor Liaudat, el desequilibrio sería de 1.300.000 cascos.

Podrán discutirse estas cifras, podrá decirse que el consumo será mayor, que indudablemente la ley de unificación estimulará el consumo y reducirá estos márgenes; pero lo cierto es que esto indica que se trata de un problema realmente agudo que requiere una solución absolutamente inmediata.

¿Cuál es la conclusión a que llega? Como solución de fondo, extirpar hectáreas de viña. Yo pregunto, señor presidente, si alguien podría hablar seriamente de destruir cultivos existentes, que cuestan gastos considerables, esfuerzos de años, si no se hubiera llegado a concretar la magnitud del problema. ¿Es posible pensar que si no estuviéramos abocados a una verdadera catástrofe, no sólo económica, sino de carácter social en estas industrias, podría llegarse a medidas tan radicales?

Se calcula en este estudio que el número de hectáreas a eliminar puede ser de 15.000 ó más. No entro a discutir las cifras en detalle. Creo que puede haber error, que puede ser menor la cantidad de hectáreas que haya que transformar, pero estoy convencido de que habrá que transformar viñedos.

Los otros aspectos subsidiarios son la compra de vino y la compra de uva. ¿Por qué? Porque el proceso de extirpación de viña y su transformación en otro cultivo es un proceso lento. Mientras se realiza, si no hay otras medidas, se producirá la catástrofe. Y a los hombres que con un análisis su-

(1) Véase pág. 654.

perficial dicen: ¿para qué se va a comprar grandes cantidades de uva, con qué objeto? Les afirmo que en este proyecto se persigue la finalidad de aprovechar esa uva para otros usos industriales, como el zumo de uva verde, que puede reemplazar en cierta medida en la elaboración industrial a otros productos, el ácido tartárico, como el arropo y como una cantidad de subproductos.

—Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales, doctor Rodolfo Coronas Segura.

Pero aun admitiendo que eso no fuera industrialmente aprovechable, no se puede hacer el argumento de la destrucción de riqueza. Es necesario no impresionarse por frases un tanto desgastadas por el uso. Si no hay compradores, si no hay posibilidad de adquisición del producto de las viñas, ¿se destruye o no se destruye esa riqueza, queda o no en la cepa? ¿Y qué significa eso? Significa la ruina del agricultor, significa la imposibilidad de trabajo por parte de los obreros y la pérdida de los jornales que ese esfuerzo de la vendimia supone, y significa, en fin, un panorama sombrío que culmina en una verdadera catástrofe social.

He destacado estos tres aspectos porque quería correlacionarlos con algo muy interesante que evidentemente el señor diputado desconocía. Es la opinión de un socialista eminente — creo que los señores diputados de ese sector no considerarán que exagero la calificación — el doctor Repetto, que en un reportaje publicado en «Los Andes» del 1º de Abril de 1933, hizo declaraciones sobre el problema de la industria vitivinícola. Afirmo que si el señor diputado Repetto se hubiera propuesto fundar el proyecto que hoy está a consideración de la Cámara, no lo hubiera hecho con palabras más sensatas y ecuanímes.

Leemos en el diario: «Preguntamos su opinión sobre la industria vitiviní-

cola y nos responde: La base de la economía actual de la provincia de Mendoza reside, sin duda, en la industria vitivinícola. Esta base se mantendrá sólidamente mientras la extensión de esta industria no exceda las necesidades del consumo y mientras la provincia sepa agregar a ella nuevas y distintas formas de actividad. Diversificar los cultivos en la industria es un problema candente de Mendoza, y a la solución de este problema desea contribuir la sección mendocina de nuestro partido en el punto último de su programa industrial, así concebido: primas a las nuevas industrias que tiendan a transformar la industria vitivinícola.

«De aquí emerge — continúa expresando el doctor Repetto — todo un plan que podría sintetizarse en las siguientes medidas: Primero, dar nuevas aplicaciones a la uva de vinificar»; medida que propone el proyecto que discutimos.

«Segundo, substituir parcialmente la uva de vinificar por la uva de mesa», que también lo propone el proyecto.

«Tercero, substituir por otros cultivos los viñedos en las zonas menos aptas o más castigadas por las plagas.

«Cuarto, intensificar los demás cultivos e introducir otros nuevos». Exactamente lo que propone el proyecto del Poder Ejecutivo.

«La aplicación de este plan es tanto más urgente, cuanto que la crisis agrícola no parece estar próxima a su terminación. No hay que olvidar que en nuestro país el consumo de vino y el bienestar de las chacras corren parejas».

Pero hay algo más sorprendente, que sería interesante que el señor diputado por la Capital hubiese conocido antes del debate: «¿Por qué no se limita por ley la extensión total de los viñedos para el vino? ¿Por qué no se estimula el cambio de la vid por otro cultivo mediante indemnizaciones o primas bien estudiadas?» Y esto es, en definitiva, señor presidente, lo que estamos discutiendo.

Quiero señalar cómo el transcurso del tiempo nos va dando la razón a los hombres de Mendoza, acusados ligeramente de monopolistas, no sólo por hombres que pertenecen a distintas agrupaciones políticas, sino aun por productores de otras zonas que vivían con una venda sobre los ojos en cuanto a la realidad económica de esta industria.

Hemos presentado algunos proyectos referentes a ella. Uno fué presentado por el doctor Corominas Segura, excelente proyecto, que tendía a crear la comisión nacional de la industria vitivinícola, finalidad a la que después me referiré. En una de sus cláusulas prohibía la plantación de viñedos. Recuerdo que cuando se habló de esa posibilidad, se produjo una tormenta en los pasillos, que no llegó nunca al recinto, desgraciadamente, siendo ésta la primera oportunidad que tenemos para hacer un debate amplio sobre la industria vitivinícola. Recuerdo que en aquellas bancas de atrás conversando con los diputados Ahumada y Luján, les expresaba: ustedes, representantes de otras zonas, que hoy consideran peligrosa, como política monopolista esta medida que proponemos han de solicitarla a más tardar dentro de pocos años. Y los hechos lo confirman. El Poder Ejecutivo nacional, con una amplia información sobre la realidad de la industria vitivinícola, viene a decirle al Congreso: no basta prohibir la plantación de viñas, sino que aun hay que arrancar muchas de las actuales.

¿Y por qué las primas para transformación? Las primas para la transformación, son absolutamente necesarias. Una industria que ha sufrido esta sangría continua durante varios años, este proceso de crisis aguda, indudablemente crisis no solucionada con algunas medidas locales que han resultado contraproducentes — me apresuro a reconocerlo — ha colocado a los productores en una condición de agotamiento tal, que no se encuentran en condiciones de producir ellos la transformación.

Por otra parte, la transformación de hectáreas de viñas en otros productos, ¿es una cosa simple y fácil?

Según cálculos que existen en el Ministerio de Agricultura, que hoy no tengo a mano, arrancar y poner en condiciones esos terrenos para otros cultivos, ese trabajo sólo, costaría de \$ 1.300 a 1.400 por hectárea. Pero hay algo más: ¿cuánto costará transformar los viñedos en otros cultivos que esas zonas de acuerdo a su tierra y a su clima soportan?

Voy a leer un cuadro, que tengo aquí, de cálculos hechos por técnicos sumamente autorizados sobre lo que costarían algunos cultivos.

Para duraznos de tres años, 1.170 pesos por hectáreas; para ciruelos de cuatro años, 1.435 pesos por hectárea; para damascos de cuatro años 1.435 pesos; para damascos de invierno de cuatro años, 1.640; para manzanas de cuatro años, 1.595; para almendros de seis años, 2.006; para olivos de seis años, 1.390; para nogales de ocho años, 1.570.

Como se apercibirán los señores diputados la transformación enunciada supone un esfuerzo económico superior a la capacidad actual del productor.

Sr. Arrieta. — Si me permite el señor diputado.

Dentro del concepto con que ha sido elaborada la ley, ¿la indemnización no sólo englobaría la extirpación de la viña sino también los nuevos cultivos a establecer?

Sr. Vicchi. — Sí, señor diputado. La mayor o menor indemnización dependerá del mayor número de hectáreas que haya que transformar. En el proyecto del Poder Ejecutivo se habla de 15.000 hectáreas. Nosotros creemos que el cálculo es elevado.

Sr. Arrieta. — Si fueran 15.000 hectáreas, con 15.000.000 que a ello se destinan no se alcanzaría siquiera a pagar la indemnización por la extirpación de la cepa.

Sr. Vicchi. — Nosotros creemos que esa cifra de hectáreas es evidentemente alta. El mayor estudio que sobre el

punto se hará después por la Junta Reguladora, ha de poder determinar con precisión su número.

Sr. Briuolo. — Es decir que puede esperarse tranquilamente un nuevo pedido...

Sr. Vicchi. — No se modificarán los recursos sobre lo que ya existe.

Sr. Briuolo. — Se puede interpretar eso de las palabras del señor diputado.

Sr. Vicchi. — No, señor diputado.

Sr. Arrieta. — Si fuera necesario, habrá indudablemente que hacer luego un nuevo pedido.

Sr. Vicchi. — Yo creo que está perfectamente calculada la cifra de treinta millones, suma que será suficiente, para regular la industria.

Deseo concluir con esta exposición un tanto desordenada y fragmentaria y pido excusas a mis colegas por su extensión; pero sentía la necesidad de rectificar en una forma fundada algunas afirmaciones ligeras que se han hecho en el recinto.

Pero quiero señalar muy brevemente otro aspecto. Se habla de las grandes culpas de las zonas productoras por la actual crisis. He reconocido que se tomaron algunas medidas económicas contraproducentes; pero si hay culpas, algunas, y no las menores, ha tenido el gobierno de la Nación que, con excepción del actual, que adopta medidas que lo prestigian en alto grado, jamás ha tenido la menor preocupación por la industria vitivinícola, no obstante ser la principal fuente de vida de 700.000 habitantes, en forma casi exclusiva, y, en una manera menos directa, de otros núcleos importantes de población diseminados por todo el país.

Si el gobierno de la Nación hubiera percibido que los remedios para la industria vitivinícola debían tomarse en todo el territorio, porque de lo contrario lo que hacían algunas zonas significaba mejorar y acrecer a su costa la potencia económica de otras zonas, entonces no habríamos llegado a la situación actual. Por eso interesa decir que el aumento de viñas en los últimos tiempos se ha producido en mayor pro-

porción en otras zonas que en nuestra provincia.

Mendoza incurrió en el grave error de creer que por sí sola podía solucionar el problema, y las medidas adoptadas para evitar el proceso de superproducción, tendiendo a corregir el mal — como se ha dicho con acierto — más por sus síntomas que buscando una solución de fondo, contribuyeron a facilitar la expansión de otras zonas. Afortunadamente, la hora de la rectificación ha llegado, y el gobierno de la Nación ha percibido que el problema de la industria vitivinícola es un problema nacional y se resuelve a afrontarlo con un criterio de unidad. Ese era nuestro más íntimo deseo; por eso venimos combatiendo desde hace años. y a ello responden los proyectos presentados: a dar a la industria vitivinícola el carácter de una industria con personería nacional.

Y termino, señor presidente, expresando que el gobierno de la Nación, el Poder Ejecutivo y el actual Congreso, que hoy afrontan la resolución de este gravísimo problema con una solución de fondo, se harán acreedores a la gratitud de los habitantes de las provincias vitivinícolas, que no tienen otra culpa que la de haber dedicado un intenso y tesonero esfuerzo para crear la grandeza de zonas que, sino, serían inmensos desiertos desolados e infecundos. Es, pues, necesario percibir en toda su trascendencia el problema; para que no haya derecho a atribuir a ciertos legisladores, lo que en forma magistral expresa Octavio R. Amadeo en su libro reciente *Vidas argentinas*: Algunos hombres del litoral no entienden a las provincias porque, a fuerza de mirar para Europa, viven dando la espalda al interior. (*Muy bien! Aplausos*).

Sr. Simón Padrós. — Pido la palabra.

A esta altura del debate, con la Cámara evidentemente cansada, y estando quizás ausente de ella el espíritu de buena parte de los señores legisladores, me excusarán que haga una información que no puede ser sino brevísima después de la documentada exposición del señor diputado Godoy y de la nutrida en ar-

gumentos que acaba de hacer el señor diputado Vicuña. Pero en los momentos en que el Congreso va a sancionar una ley de defensa y amparo para las provincias cuyanas, no podía faltar la voz de Tucumán. Sentía el deber de hacerlo y también el deseo, porque si alguna provincia ha sufrido de cerca las mismas angustias que han vivido las provincias de Cuyo, es precisamente la de Tucumán al ver día a día descapitalizada su industria, cercana la quiebra de sus actividades como si fueran empresas filibusteras, que no arraigaran en co-razón y tierra argentinos hogares y capitales para su mayor progreso y prestigio. El triunfo máximo que esa ley representa, es la reconquista de la simpatía nacional que se vuelca en buena hora al Norte y al Oeste del país, a punto de que hoy podemos en verdad decir cuando los argentinos del litoral visitan nuestras provincias: esta casa es vuestra casa, porque habéis permitido edificarla. Nuestro esfuerzo es vuestro premio porque lo habéis amparado y lo habéis defendido. (*¡Muy bien!*).

En síntesis, señores diputados, en la ley de protección vitivinícola, con la creación de su Junta Reguladora y su disponibilidad de 30.000.000 para conseguir los fines que la ley persigue, ¿qué es lo que se ataca en ella? ¿Es la magnitud de la cifra? ¿Es la intensidad del subsidio? ¿O es el mecanismo en sí que delega en una junta, reducida a un mínimo de miembros para que sea verdaderamente ejecutiva, la resolución del grave problema vitivinícola?

Yo voy simplemente a abrir por un instante esas carpetas que con amable ironía el señor diputado Enrique Dickmann manifestaba que agobiaban por la magnitud de su contenido, y yo supongo, por la exactitud de sus cifras. Voy a hacer únicamente dos citas de dos antecedentes extranjeros, porque cuando en nuestra legislación nos sentimos a veces un poco fríos, desamparados de argumento que pueda alcanzar el sentimiento y a la lógica de los argentinos, nos abrigamos con el ropaje extranjero, como si allí encontráramos una mayor

seguridad para demostrar el acierto de las medidas que aquí tomamos. Voy a citar dos ejemplos de la manera cómo un gran país, Gran Bretaña, defiende y ampara los renglones de su actividad económica. En Gran Bretaña no hay vino, pero hay azúcar y hay vacas; y vamos a ver cómo actúa el Reino Unido para afinar la nueva industria del azúcar o para defender su riqueza ganadera. Otorga un subsidio tan liberal a la industria azucarera en forma de pago directo por kilo de azúcar elaborado, que en la Cámara de los Comunes, las declaraciones formuladas por el subsecretario financiero del Tesoro expresan que desde el 1º de Octubre del año 1924 hasta el 31 de Marzo de 1932 el gobierno pagó en concepto de subsidio a la industria azucarera de Gran Bretaña, la suma de 24.000.000 de libras esterlinas, que al cambio de aquella fecha importaba la suma de 327.000.000 de pesos, equivalente a un promedio de más de 43.000.000 de pesos moneda nacional por año. El subsidio era de 7 chelines. 9 peniques — pesos 1,25 — por diez kilos de azúcar, para arraigar en Gran Bretaña la industria azucarera de la remolacha.

Pero el ejemplo más reciente y más análogo al de la ley de vinos es el de la ley de subsidio al ganado, votada por el Parlamento inglés el 16 de Julio del año en curso, ley que llevaba el membrete de «urgente» cuando fué insertada en el mensaje al Parlamento inglés. Y esta ley es tan gemela en su finalidad y en su mecanismo a la ley de vinos, que no pareciera sino que en ella se inspirara. Dice así: «1º Provee el establecimiento de un fondo denominado en adelante «Fondo de Ganado», bajo la administración y control del Ministerio de Agricultura. — 2º Provee para que se autorice a la Tesorería de la Nación a efectuar durante el año financiero que finaliza el 31 de Marzo de 1935, adelantos del «Fondo de Consolidación» — de ese fondo que en un debate no tan lejano se recordó la misión histórica que para la política monetaria del Reino Unido tuvo en su oportunidad — al «Fon-

do de Ganado» hasta un total de 3.000.000 de libras esterlinas para establecer que todo adelanto hecho del «Fondo de Consolidación» será reembolsado con dineros que el Parlamento estipulará antes de finalizar ese año financiero. — 3º Provee para que se autorice a efectuar del «Fondo de Ganado» pagos a los productores con respecto a la venta de novillos o reses realizadas en el Reino Unido por dichos productores durante el período que empezará el 1º de Septiembre de 1934 y terminará el 30 de Marzo de 1935. Y dichos pagos se harán a un tipo que en caso de animales en pie no exceda de 5 chelines por quintal inglés, o sea 16,47 centavos por kilo, y en caso de reses, no exceda de 9 chelines, 4 peniques por quintal, o sea 30,76 centavos por kilo.» Y agrega: «Provee el nombramiento de una Comisión de Ganado para que se autorice a pagar del fondo, la remuneración de los miembros, empleados y agentes y cualquier otro gasto relacionado con los asuntos antedichos.» Y también agrega una nota interesantísima: «El gobierno inglés hubiera preferido crear un impuesto a la importación de carnes, en vez de subsidiar directamente esta industria, pero se lo impiden los tratados contraídos con los Dominios y la República Argentina. El gobierno inglés piensa recuperar las sumas a gastarse mediante un impuesto a la importación de carnes que se habrá de establecer cuando expiren los tratados; pero si entonces no resulta conveniente el subsidio, será pagado por el contribuyente.» Así lo ha declarado el Ministerio de Agricultura en el Parlamento inglés.

Esta cita, señores diputados, es obtenida de información directa y textual de la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco de la Nación Argentina, cita tan veraz como todas las que contienen mis carpetas.

Veán, señores diputados, cómo el mecanismo de esta ley es gemelo con el que inspira la ley reguladora del vino.

Tucumán se hace un honor y un de-

ber en votar esta ley por una solidaridad económica con esa provincia que ha sufrido como aquélla y también como un estímulo a estos hombres que en el gobierno de Mendoza y en la representación parlamentaria, han arraigado tan hondo el aplauso y la opinión entera de la provincia y que quizás premie nuevamente en lides bien cercanas.

Debo decir esto más: Mendoza ha demostrado en su acción de gobierno y en su acción legislativa, que ha sabido defender a los humildes; pero ha sabido también amparar a los capitales, que es otra manera de ayudar a los humildes.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Sr. Graffigna. — Pido la palabra, no para hablar específicamente de la industria, ni para hacer resaltar su importancia y el rol preponderante que juega dentro de la economía nacional, ni para dar la impresión a la Cámara de la situación caótica y afligente en que se desenvuelve, ni tampoco para referirme a la inconsistente e incoherente exposición que ha hecho el señor diputado Pena.

Las exposiciones hechas por mis distinguidos colegas han deshecho todas esas objeciones con maestría y elocuencia. Solamente he pedido la palabra para sentar mi posición doctrinaria al respecto. Corresponde una síntesis después de todo lo que hemos escuchado en el recinto.

La autoridad es para la sociedad la razón de su existencia, ha dicho un sociólogo contemporáneo. Es la necesidad ineludible que sienten las multitudes de un principio ordenador y unificante que mantenga en ellas la paz y el libre ejercicio del derecho y haga converger el esfuerzo y la acción de todos en favor de la comunidad.

La escuela individualista liberal, que por desgracia tiene aún muchos representantes en el país, pretendía y pretende aún a esta altura de la civilización, que la función estatal debía limitarse a la acción del gendarme, de vigilar tutelando el cumplimiento de los contratos realizados entre los individuos, aunque estos contratos vio-

laran el espíritu de justicia y no estuvieran de acuerdo con la más rudimentaria disciplina. Pero el mundo ha pagado muy caro el liberalismo económico, el olvido de la función de cooperación y de asistencia tan inherente a la autoridad social, como el deber de vigilar el derecho lleva a las naciones a las crisis provenientes del desequilibrio entre la producción y el consumo, desequilibrio que echa sus raíces profundas en la postura negativa y apática que asignan los individualistas al mecanismo funcional del Estado.

Por eso, el racional derecho político establece dos fines al organismo estatal: el de tutela jurídica y el suplementario o subsidiario, que es el que le compete, en virtud de la misión de encaminar el conjunto social a su finalidad. El Estado debe suplir la deficiencia individual, sobre todo en materia de realización del conjunto de los elementos positivos, y de adecuar la condición para llevar a cabo la prosperidad colectiva.

Esta acción subsidiaria del Estado, que no debe confundirse con el Estado absorbente e invasor que propugnan los colectivistas en general, es un principio primario de derecho público que se funda en la exigencia social misma del hombre, que lo lleva a congregarse para subvenir socialmente a lo que

no puede tener individualmente, por que escapa a su órbita.

Además, si por definición, el Estado es la asociación de familias que siendo dueñas de un territorio común tienen normas jurídicas comunes que regulan su vida política y social y propenden a conseguir fines comunes, es lógico que el organismo gubernativo supla la insuficiencia privada en el orden de la consecución de los bienes y de las condiciones necesarias al hombre para cumplir su finalidad de paz y de bienestar. Y con mayor razón debemos propender, dentro de límites legítimos y razonables, al debido ordenamiento económico, sin el cual no puede existir una verdadera y firme organización social.

Por eso, señor presidente, soy un ferviente preconizador de leyes como la presente, que tienden a ordenar racionalmente las relaciones entre la producción y el consumo.

Nada más.

Sr. Presidente (Corominas Segura).

— No habiendo solicitado la palabra ningún señor diputado, queda terminada la discusión en general.

Como no hay número en la casa, queda levantada la sesión.

—Era la hora 23 y 2 minutos.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO VICCHI

Resultados financieros de las sociedades anónimas nacionales dedicadas a la vitivinicultura (1)

Grupos de sociedades	Capitales efectivos		Ganancia (+) Pérdida (—)	
	1927	1933	1927	1933
12 Sociedades comparables	48.033.000	45.217.000	+ 3.800.000	— 1.292.000
8 Sociedades nuevas (2)	—	15.866.000	—	— 814.000
Total de sociedades	48.033.000	61.083.000	+ 3.800.000	— 2.106.000

(1) Se ha incluido las sociedades vitivinícolas de Mendoza y San Juan.

(2) Sociedades que cerraron su primer ejercicio después de 1927.